

DESPLAZAMIENTO

Los Montes de María: Análisis de la conflictividad

ATALINA MARTÍNEZ / PNUD MONTES DE MARÍA



Área de paz,
desarrollo y
reconciliación



P N
U D
Colombia

Bruno Moro
Representante Residente - PNUD

María del Carmen Sacasa
Directora de País A.I.

Elaborado por
Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación

Alessandro Preti
Coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación

Olga González Reyes
Astrid Elena Villegas
Unidad de Análisis

Aldo Fabricio Morales
Tatiana Ortega Muñoz
Catalina Martínez Coral
Geanny Rendón Blanco
Oficina territorial de Los Montes de María

Reconocimiento especial
Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD,
Nueva York (BCPR, por su sigla en inglés)

Agradecimientos
Apolinar Díaz Callejas. José Francisco Restrepo. Eduardo Porras Mendoza. Nicolás Berrío.
Sergio Arboleda. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Cabildo indígena Zenú.
Red de Comunicaciones de los Montes de María. Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes
de María. Diócesis de Sincelejo. Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de
los Montes de María. Mesa Afrocolombiana de los Montes de María. Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado de los Montes de María. Asociación Red de Jóvenes Rurales de los Montes de
María. SENA Sincelejo. Cámara de Comercio de Sincelejo. Secretaría de Agricultura de Sucre.

Diseño, impresión y acabados
Impresol PBX: 2508244
www.impresolediciones.com

Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan
necesariamente las opiniones del PNUD, su junta directiva,
ni los Estados miembros.

Junio de 2010

▶▶▶▶ El análisis que se presenta a continuación se apoyó en entrevistas realizadas en terreno a representantes de instituciones del Estado; líderes sociales, de organizaciones y espacios de articulación social. También fueron de utilidad algunas investigaciones sobre la región, elaboradas por la academia y ciertos observatorios.

Su elaboración se basa en la metodología “Análisis del desarrollo relacionado con el conflicto” (Conflict-related Development Analysis - CDA, por su sigla en inglés), herramienta preparada por la Dirección para la Prevención de Crisis y la Recuperación del PNUD (Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR), utilizada en diferentes países del mundo.



Contenido

5 Antecedentes

7 Las causas estructurales y los actores

10 La tenencia de la tierra: terratenientes versus pequeños propietarios e indígenas

11 Modelo de desarrollo: empresas agroindustriales y ganaderos
versus economía campesina

13 Confrontación política y conflicto de clases: élites versus sectores sociales
populares. La pequeña guerra fría de Los Montes de María

16 Corrupción y fraude electoral

17 Las causas coyunturales y los actores

17 Control estratégico por grupos dedicados al narcotráfico

18 Control del territorio por grupos paramilitares

22 Actores locales de paz y sus capacidades de construcción de paz

31 Situación actual y dinámicas

32 La recuperación y consolidación del territorio

34 Se acentúa el despojo de las tierras de los campesinos. El problema agrario sigue
siendo el principal factor del conflicto

39 Empobrecimiento y debilitamiento de las clases populares

40 Efectos del conflicto

47 La reintegración de los desmovilizados

48 Las estructuras emergentes o el neoparamilitarismo

50 Leve recuperación del territorio

51 El resurgimiento de las organizaciones sociales

53 Escenarios posibles y tendencias

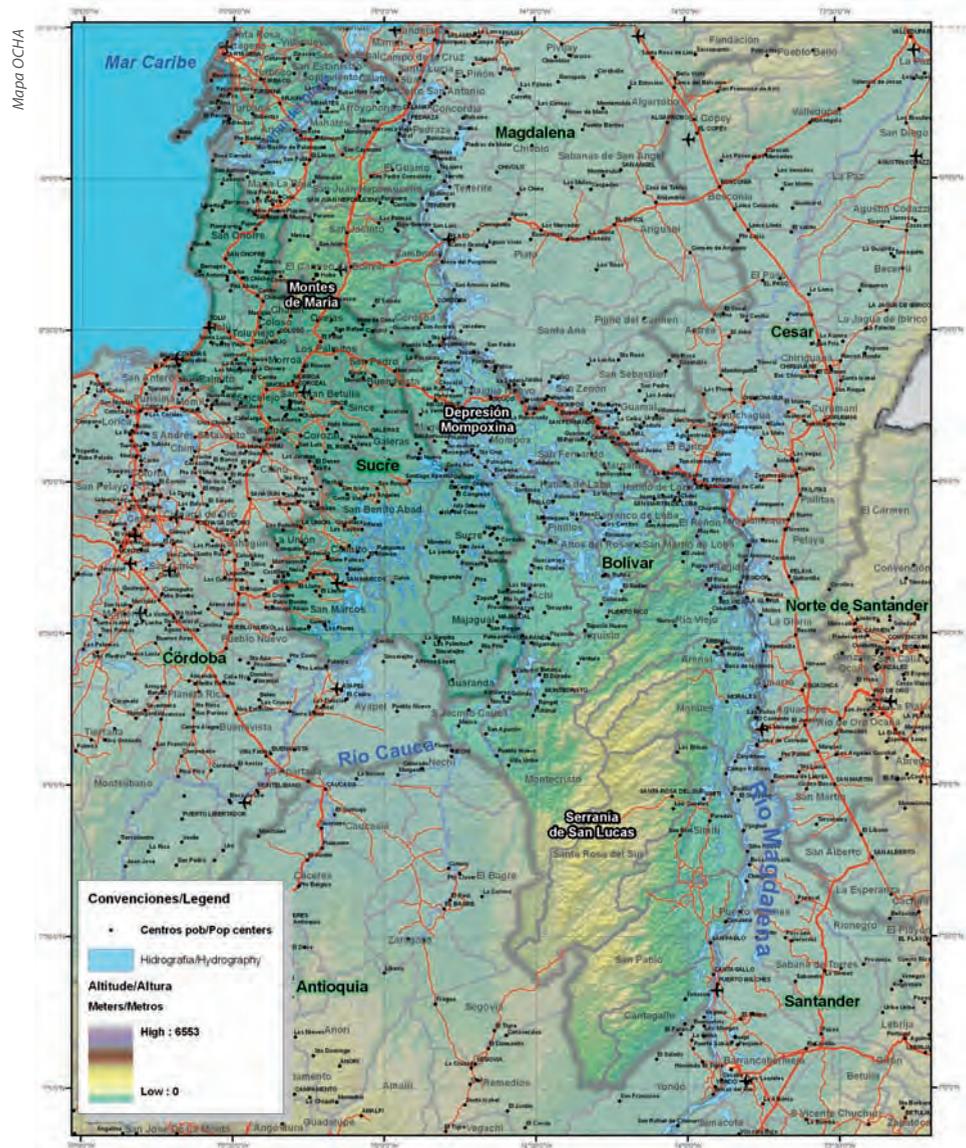
- 53 Aumento de la vulnerabilidad social como factor para el control territorial
- 54 Se reafirma la intervención cívico-militar
- 55 Toma fuerza la construcción de paz
- 56 Riesgo de inseguridad alimentaria
- 56 Posible continuación del conflicto por la tierra

57 Identificación de caminos a seguir

- 57 Prevención, mitigación transformación de conflictos y cultura de paz
- 58 Verdad, justicia y reparación a las víctimas
- 59 Gobernabilidad y democracia local
- 59 Desarrollo incluyente y equitativo



1. Antecedentes



La subregión de Los Montes de María está conformada por los municipios de María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba (pertenecientes al departamento de Bolívar) y San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, San Antonio de Palmito y Tolviejo (pertenecientes al departamento de Sucre).

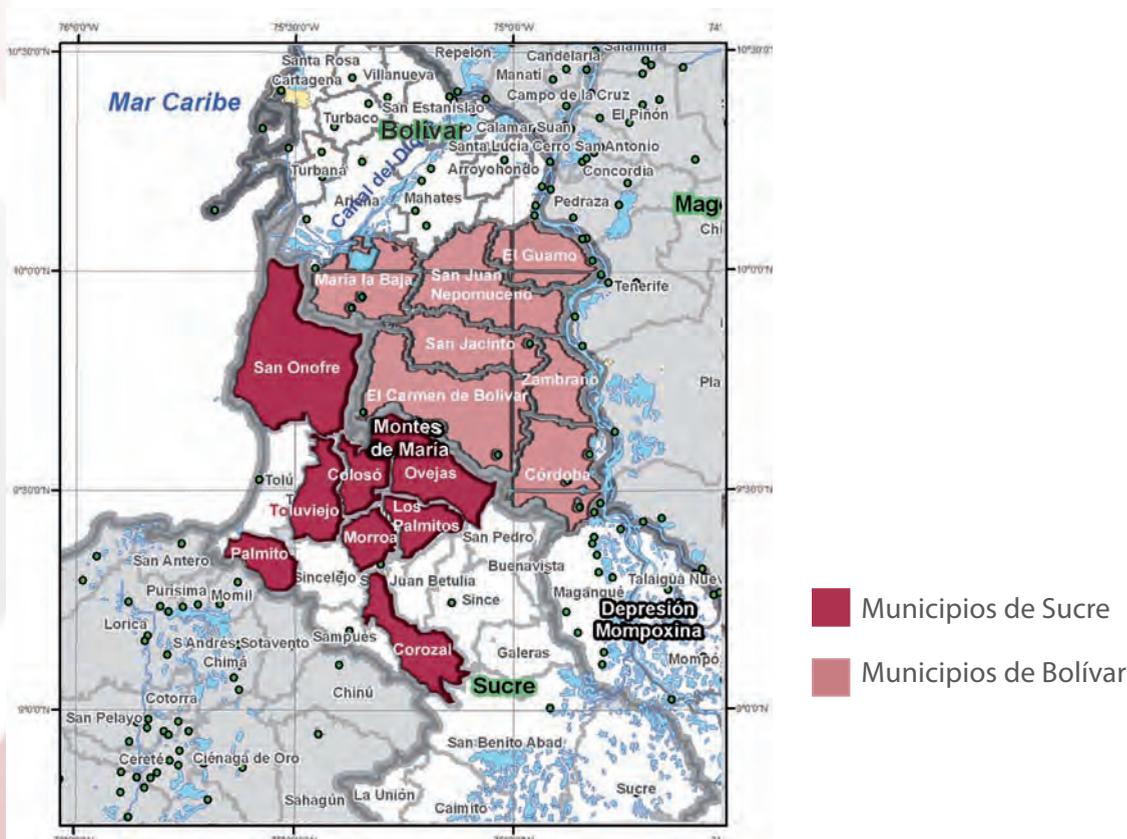
En los Montes de María –que tiene una extensión de 6.466 km²– habitan aproximadamente 438.119 personas, según el censo 2005. Sin embargo, se ha presentado una movilización masiva del campo a la ciudad por la presión de actores con intereses particulares, ejecutada mediante la acción de los grupos armados. En 2005, el 55% de la población de los Montes de María vive en la parte urbana y el 45% en el área rural.

Tanto Bolívar como Sucre, los dos departamentos en los que se encuentra la región, presentan índices de desarrollo humano inferiores al promedio nacional, aunque en Sucre la situación es más precaria. Mientras en 2005 Colombia registró un índice de desarrollo humano de 0,78, el de Bolívar era de 0,77 y el de Sucre de 0,73, según el Departamento Nacional de Planeación. Para ese mismo año, los ingresos de la población de los Montes de María eran en promedio de 15.000 pesos diarios por hogar, el 50% de lo requerido para obtener lo mínimo necesario. Esto conduce a tener el 59,7% de la población con necesidades básicas insatisfechas.

Teniendo en cuenta el censo de 2005, la región registra también altos índices de analfabetismo: el 22,8% de su población, es decir 75.891 personas, no sabe leer ni escribir. La cobertura de salud alcanza solamente el 76,3% de la población total. En 2005, los afiliados al régimen subsidiado suman casi el doble de los afiliados al régimen contributivo. Esto se agrava en la población infantil, ya que el 25% de los niños menores de 5 años presenta desnutrición aguda y, otro 20%, riesgo de desnutrición. Solamente el 12,8% de las viviendas cuenta con los servicios básicos de agua, energía y alcantarillado.

Los Montes de María, que abarcan la zona media de los departamentos de Sucre y Bolívar, están atravesados por la Troncal de Occidente y la Troncal del Caribe, vías principales que conectan el Caribe, y al interior del país con la Costa.

Los 15 municipios de Los Montes de María



2. Causas estructurales y actores

Los Montes de María han sido históricamente una región humilde pero con abundancia de alimentos, hasta el punto de ser considerada “la despensa del Caribe”. A excepción de las zonas de explotación ganadera en los fértiles valles del río Magdalena, esta región ha sido poblada principalmente por familias campesinas y afrocolombianas que encontraron allí tierras baldías donde formaron varios asentamientos después de la liberación de la esclavitud¹.

Asimismo, se encuentra en la zona un pueblo indígena, el zenú, con asentamientos en los municipios de San Antonio de Palmito, Toluviejo, San Onofre, Colosó y Morroa.

La denominación de “la despensa del Caribe” responde a la enorme cantidad de alimentos allí producidos, así como a su calidad. “Aquí la yuca no se vendía por kilos, sino por pilas (montones organizados) y la ahuyama se la regalaban a uno para los puercos”, dice Dagoberto Villadiego, líder de la ANUC. La yuca y el ñame eran tan grandes, que una yuca de esa época tenía el tamaño de tres yucas de hoy, mientras el plátano llenaba los canastos de Los Montes de María y sus alrededores.

Esta gran producción ha estado en manos de pequeños propietarios, pero grandes conocedores de los recursos del territorio. La población campesina (pequeños propietarios y campesinos sin tierra) de Los Montes de María se ha caracterizado por su dignidad y por su convicción de la relevancia que como sector social tienen para la región.

“...desde principios del siglo veinte, se crean organizaciones que reivindican el derecho a la tierra en San Onofre, Colosó y Ovejas. Estas acciones son precursoras de las llamadas “Ligas campesinas” que posteriormente se formalizan entre los años 1930-1940, las cuales son apoyadas por la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC (sindicato de tendencia liberal) y en su dinámica se extienden a municipios como El Carmen de Bolívar y Los Palmitos entre otros”².

Así, con un claro espíritu colectivo y reivindicativo, conformaron en los años 70 una de las organizaciones sociales más fuertes que ha tenido el país: la ANUC, Línea Sincelejo, derivada de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Una de las principales reivindicaciones de los campesinos agrupados en la ANUC Sincelejo fue la necesidad de redistribuir la tierra, de manera que todos los campesinos tuvieran su parcela y que se respetara la vocación agrícola de las tierras fértiles que estaban siendo utilizadas para la ganadería. Con esa meta, promovieron la toma o recuperación de

¹ Eduardo Porras Mendoza, historiador y coordinador de la CNRR, Sincelejo.

² Fals Borda, Orlando (2002). *Historia doble de la Costa. T. 4, Retorno a la tierra*. Bogotá: El Ancora Editores.

tierras que se encontraban en manos de los ganaderos y los grandes propietarios, como las familias Méndez y Frieri, que concentraban buena parte de la tierra.

La acción de la ANUC llamó la atención del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Carlos Lleras Restrepo, quien promovió un proceso de desconcentración de la tierra en la región consistente en la compra de tierras a grandes propietarios y su posterior venta a los campesinos con crédito agrario de por medio. Este proceso fue acompañado de asistencia técnica y la instalación de una planta del Idema para la comercialización de sus productos.

Pero en los años 80, ante el boom de los abonos y fertilizantes químicos y de las supuestas “semillas mejoradas”, los campesinos se endeudaron para pagar estos paquetes tecnológicos traídos del exterior, lo que sumó obligaciones a los créditos que pagaban por la compra de la tierra. Los agricultores se quedaron sin recursos para producir. Las semillas y la tierra se habían transformado. Desde entonces se perdió el rastro de las semillas nativas y solo se consiguen semillas foráneas, que para crecer requieren de los productos químicos que ellos no pueden pagar.

Esta fue la primera situación que llevó a numerosas familias campesinas a vender su tierra. La llamada “parálisis” de la producción que se presentó en ese momento coincidió con la llegada del primer proyecto de cultivo de palma de aceite para la producción de biocombustibles en Los Montes de María, que se ubicó en el municipio de María La Baja, al nororiente de la región. A algunos campesinos les ofrecieron comprarles sus tierras y emplearlos, propuesta que aceptaron ante las dificultades para producir. A otros les ofrecieron sembrar la palma en sus tierras y les dieron acompañamiento en el proceso. Hasta el momento, en María La Baja se han sembrado 6.000 hectáreas de palma de aceite, y los campesinos han sido advertidos de que se aspira a llegar a 10.000.

Sin embargo, el cultivo de la palma de aceite no ha mejorado las condiciones de los campesinos. Por el contrario, la mayoría de ellos hoy se enfrenta a la pobreza. Unos sin tierra y con empleo esporádico y mal remunerado y, otros, con toda su inversión puesta en un cultivo de rendimiento tardío, mientras los cultivos de pancoger fueron abandonados.

Solo una minoría de ellos ha obtenido un resultado positivo, como Nicolás Berrío, quien comenta: “Esto nos ha permitido tener un ingreso fijo, pero no nos da tranquilidad porque la mayoría de las personas que sembraron palma están en muy mala situación”.

Este proyecto de cultivo de palma ha recibido un amplio apoyo del Ministerio de Agricultura que resalta que el 49% de la propiedad es de los mismos cultivadores. Sin embargo, los campesinos de la región aseguran que la mayoría de los cultivos están a nombre de una sola familia que todos conocen.

Los cultivos de palma de María La Baja han concentrado la mayor parte de la inversión rural del Gobierno en Los Montes de María. Esto ha afectado seriamente las posibilidades de desarrollo de los campesinos de la región y se ha convertido en un factor de conflicto en una zona en la que el desarrollo agrícola es central para las posibilidades de paz.



La historia de poblamiento de Los Montes de María y algunos rasgos de su cultura constituyen factores que inciden positiva o negativamente en el desarrollo del conflicto y la paz. Algunos de estos rasgos son:

Las bases para una cultura de paz. La población de esta región tiene incorporadas bases importantes de una cultura de paz, que se manifiestan en una mezcla natural entre la población mestiza y afrocolombiana de las clases populares, en la conciencia colectiva y la capacidad de organización que los llevó al florecimiento de sus organizaciones comunales y a la autogestión de las condiciones de desarrollo. Su espíritu de reivindicación por vías pacíficas se ha erigido en contra de las acciones armadas. Otra base de esta cultura de paz es el sector intelectual que promovió y llevó a cabo el proceso de desconcentración de la tierra en Sucre en los años 70, a pesar de la oposición de la élite conservadora.

Procesos de desarrollo y reconstrucción desatados por las desmovilizaciones en la región.

Durante los años 90, se presentaron en Los Montes de María varias desmovilizaciones de grupos subversivos. El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) firmó el acuerdo de paz en enero de 1991 en Don Gabriel, municipio de Ovejas. Un mes después, como parte del proceso de desmovilización nacional del EPL, un buen número de sus combatientes se concentró en el municipio de Juan José, Córdoba, cerca de Los Montes de María. Luego, el 9 de abril de 1994, la Corriente de Renovación Socialista (CRS) firmó su acuerdo en Flor del Monte, Ovejas.

Estos tres grupos subversivos incluyeron en la negociación de su desmovilización la creación por parte del Estado de programas de inversión social para las comunidades que habían sido afectadas por la presencia armada. Esto trajo a la población una gran esperanza de desarrollo, que se concretó en la consolidación de movimientos cívicos y el fortalecimiento de partidos políticos de izquierda, como la Unión Patriótica. Con estas iniciativas llegaron a ocupar varias alcaldías y puestos en los concejos de varios municipios de la región. Es en este escenario de paz y de entusiasmo por la política local en el que se presenta la llegada del paramilitarismo a la región.

Cultura de la ilegalidad y del clientelismo. El contrabando ha sido parte de la vida cotidiana de su gente a lo largo de varias décadas, por lo cual esquivar la ley se ha convertido en algo usual y que no genera mayor sanción moral. Parte de ese desprecio hacia la legalidad se debe a que la región no contó con un Estado protector o mediador sino con un sistema político y administrativo que asume el “gamonalismo rural” como modelo de gestión, en el que las instituciones encargadas de la provisión de los bienes y servicios que demanda la sociedad son permeadas por la práctica “clientelista-electoral”, en detrimento del ejercicio de los derechos ciudadanos.

La población de esta región tiene incorporadas bases importantes de una cultura de paz, un mestizaje natural y una gran conciencia colectiva.

Esta aquiescencia con la ilegalidad y cierto desdén por el valor de lo público y la construcción de un Estado de Derecho han sembrado las bases de una impunidad social ya arraigada, que incrementa la fragilidad de su población frente a la acción de actores ilegales.

En este contexto, se consideran cuatro causas estructurales de la conflictividad que padece la región: la tenencia de la tierra, el modelo de desarrollo, el conflicto político y de clases y la corrupción y el fraude electoral.

La tenencia de la tierra: terratenientes versus pequeños propietarios e indígenas

Durante el tiempo de la Colonia, al resguardo indígena zenú - San Andrés de Sotavento le fueron entregados los títulos de 83.000 hectáreas de tierras que poseían. "Hoy, de esas 83.000 hectáreas solo nos quedan 8.000", afirma Walter Monterroza, capitán de cabildo en este resguardo.

Por esta razón, pero especialmente por la necesidad de contar con extensiones más amplias de tierras para poder cultivar los productos necesarios para su alimentación y comercialización, a lo largo de los años la comunidad zenú ha hecho movilizaciones para la recuperación de estas tierras.

Los campesinos, como se mencionó, también realizaron tomas pacíficas de tierras "con miras a lograr una redistribución más justa de la tierra y de darles a los campesinos sin tierra las posibilidades para su desarrollo", dice Dagoberto Villadiego, líder de la ANUC.

"La única manera que tienen los sucreños de vivir es a partir de la tierra. Y si no la poseen, la tienen que disputar", afirma José Francisco Restrepo, profesor de la Corporación Universitaria del Caribe, Cecar.

Y es que en la región se llegó a un nivel muy alto de concentración de la tierra, situación que ha desatado un conflicto histórico por su propiedad entre terratenientes y pequeños propietarios e indígenas.

La llegada de la guerrilla a la región ocurrió en la época en que se efectuaban las tomas de tierras. En simpatía con la acción de los campesinos, la guerrilla hostigó a los terratenientes. Sin embargo, los campesinos, organizados en la ANUC, rechazaron la presencia de la guerrilla y las acciones por la vía de las armas.

Los actores involucrados en este conflicto son, por una parte, los terratenientes, principalmente aquellos que dedican sus grandes fincas a la ganadería extensiva con el interés de obtener alta rentabilidad.

Varios autores han reseñado la vinculación de los terratenientes con el surgimiento del paramilitarismo, con el interés especial de evitar las tomas de tierras y de recuperar las que les habían sido compradas por el Incora para promover la desconcentración de la tierra.



Después del fenómeno del paramilitarismo, varias de esas fincas que les fueron compradas por el Incora en los años 60 fueron reconquistadas por la vía de las armas y las amenazas.

Otro actor de este conflicto son las organizaciones campesinas, representadas principalmente por la ANUC, pues contra ellas en particular se ha desatado la violencia paramilitar como parte de este conflicto por la tierra. “Decenas de líderes de la ANUC fueron asesinados y cientos de ellos forzados al desplazamiento, hasta llevar a la organización casi a su desaparición”, dice José Macareno Acosta, líder de la ANUC.

Por otra parte, se encuentra el resguardo indígena zenú, que también fue atacado como parte de la persecución contra los “tomatierras”. Varios de sus líderes y cabildos fueron asesinados y sus comunidades, hostigadas. Más adelante, los paramilitares intentaron cooptar a las autoridades indígenas para capturar los recursos que llegan al resguardo como transferencias de la nación. Esto ha causado divisiones internas, que han debilitado a la comunidad.

Finalmente, se encuentra la guerrilla, que con sus amenazas y secuestros a los terratenientes agravó seriamente el conflicto y cerró las posibilidades de una resolución pacífica. Su acción armada incitó a una respuesta del mismo tipo.

El modelo de desarrollo: empresas agroindustriales y ganaderos versus economía campesina

Una segunda causa estructural del conflicto en Los Montes de María es que no se ha logrado contar con un modelo de desarrollo equitativo e incluyente, que haga posible el desarrollo de todos los sectores productivos.

Las políticas desarrolladas en los años 60 y 70, que promovieron la economía campesina, han sido rechazadas por las élites del campo, que abogan por el apoyo estatal a la ganadería extensiva y los extensos monocultivos³. En épocas recientes, las políticas de Estado han cambiado radicalmente y se han enfocado en beneficiar a los grandes capitales, lo que ha afectado seriamente la producción de los minifundios agrícolas.

De esta manera, se ha causado en la región una confrontación entre quienes defienden modelos de desarrollo distintos. Dos son los principales aspectos que se debaten:

Conflicto por el uso de las tierras fértiles para la ganadería

Desde la época de la colonización de la región, se han visto confrontados los representantes de la economía campesina y aquellos de la ganadería. La razón es que, mientras las

³ Apolinar Díaz Callejas, investigador y ex gobernador de Sucre.

zonas más fértiles, que son los valles de los ríos y las llanuras, están dedicadas a la ganadería extensiva, la agricultura campesina –base de la gran despensa de la Costa Caribe– se encuentra en zonas menos fértiles, como las lomas de las montañas.

Por esto, además de la histórica presión de los campesinos por la propiedad de la tierra, ellos y ellas han liderado la lucha por una distribución equitativa del uso del suelo, de manera que las tierras más fértiles puedan ser utilizadas para la agricultura campesina. A esto se opone la élite ganadera, que defiende sus intereses y propiedades.

Unos y otros han utilizado tanto acciones políticas como mecanismos de hecho en esta confrontación. La labor de incidencia que han realizado tanto los campesinos como los ganaderos se ha visto reflejada en las distintas políticas públicas implementadas por el Gobierno nacional, según el momento histórico. Mientras en los años 70 se priorizó la economía campesina, hoy en día esta se encuentra en decadencia y se fortalece la ganadería.

Conflicto entre la economía campesina y agroindustrial

La primera experiencia de una agricultura industrial en Los Montes de María fue la del tabaco, principal fuente de empleo asalariado en la región durante buena parte del siglo XX. Aunque esta industria creó riqueza solo a unas pocas personas, se convirtió en fuente de empleo para una gran cantidad de población y trajo bonanza a la región.

La más reciente experiencia de agricultura industrial ha sido la de la palma de aceite, que se estableció en María La Baja y ha causado un impacto muy distinto al del tabaco. Los empresarios de palma implantaron relaciones de poder con los campesinos y les plantearon negociaciones desventajosas para los minifundistas, como la compra y el arriendo de tierras a bajo precio o a cambio un empleo de obrero.

La siembra de palma ha tenido como consecuencia la concentración de la tierra y de la producción agrícola en María La Baja. Como parte de las políticas que las empresas palmeras trajeron inicialmente a la región y por la falta de incentivos, el cultivo de alimentos bajó aceleradamente, lo que en la actualidad pone en riesgo el desarrollo humano y la seguridad alimentaria de los minifundistas.

Uno de los dos actores de estos conflictos es, de un lado, el sector ganadero y las empresas de agricultura extensiva, principalmente de palma de aceite, pertenecientes a pocas familias de la élite económica. Las empresas de palma han logrado endosar para su propio beneficio buena parte de los recursos con que cuenta el Estado para impulsar el desarrollo en el campo. Por ejemplo, mientras gran parte de la región sufre la escasez de agua, en María La Baja han sido instalados alrededor de 30 distritos de riego financiados por el Estado. También han sido ellos los principales beneficiarios de los créditos y asistencia para el agro.



Y de otra parte, está el sector campesino que reclama equidad y criterios de desarrollo en la distribución del uso de la tierra y de los recursos del Estado. Los minifundistas se ven afectados por la implementación de un modelo de desarrollo que los excluye y los ha rezagado de los programas de crédito y de asistencia técnica por parte del Estado. También reclaman por la corrupción en el manejo de los recursos destinados para el agro en la región.

Las consecuencias más críticas las padecen hoy decenas de familias campesinas de María La Baja que se han visto afectadas por la manera como han sido implementados los cultivos de palma de aceite y han quedado atrapadas en las promesas de las grandes empresas, que las llevaron a vender sus tierras o arrendarlas por 14 años y ahora se encuentran en situación de hambre y miseria.

Confrontación política y conflicto de clases: élites versus sectores sociales populares. La pequeña guerra fría de Los Montes de María

Los departamentos de Bolívar y Sucre se han caracterizado por contar con clanes familiares que se han anclado en la política y se han apoderado de los Gobiernos locales y regionales. Para esto, han encontrado el respaldo político y financiero de un amplio sector de la clase adinerada, entre ellos los terratenientes. Estos sectores de élite han promovido una política arraigada en el capitalismo y en la defensa de la seguridad y la propiedad privada.

Mientras tanto, durante los años 70, las juntas de acción comunal, los sindicatos y las organizaciones sociales, como la ANUC y la Federación Nacional Agraria (Fanal), desempeñaron una importante labor en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares, construyendo obras civiles y gestionando la acción del Estado para el acceso a créditos y programas sociales. Esa labor generó una gran cohesión social que fue recogida por movimientos cívicos y partidos de izquierda, que han promovido políticas orientadas a la reforma agraria y el desarrollo comunitario.

Estas dos tendencias se han visto confrontadas y polarizadas a partir de varias situaciones que han producido malestar en unos y otros. De un lado se encuentra la exclusión en el ejercicio del poder que “estimula una malsana intermediación por parte de una clase politiquera a la cual no le interesa responder a las necesidades, problemas y demandas de la población”. También “es evidente la incapacidad de la dirigencia política con responsabilidades en la región, que no ha hecho su tarea de propulsar el desarrollo social y económico en Los Montes de María⁴. Esto ha despertado la inconformidad de los sectores populares, excluidos de las instancias del Estado.

⁴ Tomado de un documento sobre Los Montes de María, elaborado por el Cinep, Synergia y el PNUD, en proceso de publicación.

De otro, está el malestar de las élites ante un fuerte tejido social de las clases populares que les resultaba inconveniente, además de su percepción de que ellas respaldaban a la guerrilla, derivaron en un conflicto ideológico y de clases, al estilo de una pequeña guerra fría de Los Montes de María.

Las organizaciones populares, los movimientos cívicos y los partidos de izquierda, como la Unión Patriótica, percibieron en la clase política y en la clase pudiente en general a una élite cuyo único interés era el control de los recursos y las decisiones del Estado para obtener privilegios particulares. Por su parte, la clase política manifestaba su incomodidad frente a las reivindicaciones de los líderes de movimientos cívicos y de partidos de izquierda como la Unión Patriótica, que ponían en riesgo la continuidad de sus altos ingresos.

Se agudizan los conflictos por la llegada de la guerrilla

El proceso se agravó con la aparición de la insurgencia armada en la región a comienzos de los años 80, que encontró en la Serranía de San Jacinto –zona de difícil acceso– un lugar adecuado para su refugio. Allí se asentaron uno a uno tres grupos guerrilleros: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que hicieron del robo de ganado y el secuestro de ganaderos una de sus principales fuentes de ingresos.

Entre las acciones desestabilizadoras ejecutadas por la guerrilla en la región se destacan los sabotajes, los secuestros, los contactos armados, los retenes ilegales, los hostigamientos, ataques a instalaciones, emboscadas y acciones de piratería. Todos los municipios de Los Montes de María se vieron afectados por la presencia guerrillera. Estos movimientos armados le apostaron también a la formación política de la gente, aunque con escasos resultados, debido a la resistencia promovida por la mayoría de las organizaciones sociales, y a los valores arraigados en la cultura montemariana que no cree en la vía de las armas.

Los grupos guerrilleros trajeron grandes dificultades a la región, que afectaron tanto a las familias adineradas y a la fuerza pública, principal blanco de sus ataques, como a los campesinos y sectores pobres de la población, por cuyos predios pasaban los hombres armados poniendo a estas familias en una grave situación de vulnerabilidad e inseguridad.

Pero la llegada de los grupos guerrilleros tuvo, ante todo, una fuerte incidencia en el conflicto de clases que se presentaba en la sociedad de la región. Mientras los estratos bajos de la población sacaban adelante sus causas articulándose en organizaciones sociales y a través de las instancias políticas, en una lucha aguas arriba, la presencia de la guerrilla generó en las élites la percepción de nexos de las organizaciones sociales populares con los grupos subversivos. Y aunque la mayoría de estas organizaciones, encabezadas por



la ANUC, rechazaron la presencia de la guerrilla, fueron atacadas como parte de la lucha contrainsurgente.

Los hostigamientos guerrilleros, dirigidos especialmente hacia los ganaderos, despertaron fuertes presiones de estos sobre la fuerza pública para combatir a los grupos armados ilegales por todos los medios.

El Ejército reaccionó e intensificó los combates a la guerrilla y, de manera paralela, se desató una guerra sucia, en la que líderes sociales empezaron a aparecer registrados como “guerrilleros dados de baja”, según registra el Banco de Datos Noche y Niebla del Cinep. El informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación sobre la masacre de El Salado cuestiona el papel cumplido por la Primera Brigada de Infantería de Marina durante los días que ocurrió la masacre. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación encontró méritos para sancionar disciplinariamente por omisión al capitán de corbeta Héctor Pita Vásquez. Este oficial también fue vinculado al proceso judicial que se lleva a cabo por la masacre de El Salado, por complicidad en el delito de homicidio agravado.

Expertos y académicos de la región indican que la población de Los Montes de María ha tenido una cultura de reivindicación política, mas no armada y que, en general, han sido testigos forzosamente pasivos del paso de los grupos guerrilleros por sus comunidades. La respuesta de los campesinos ante la amenaza de las armas no ha sido hostil pero tampoco hospitalaria. Han respondido de la única manera que las armas lo permiten: con una reacción de sobrevivencia.

El académico de la Cecar, José Francisco Restrepo, afirma:

“La lucha que ha dado el campesinado de Sucre es por acceder al recurso de la tierra. Ha sido democrática, a partir de las luchas sindicales y gremiales y a través de la ANUC. El campesinado ha planteado sus reivindicaciones por la tierra desde los espacios que cualquier democracia liberal le permite. El campesino tiene una tradición de lucha no armada. En la medida en que los actores armados han ido surgiendo en la región, se ha encontrado que hay una tradición de lucha contraria a la visión que tienen los armados. Por eso no han logrado cooptar las organizaciones sociales ni que esos proyectos armados sean muy eficientes en la región”.

En esta confrontación de clases, los sectores populares también tienen la percepción de que la fuerza pública ha desempeñado un papel a favor de los grandes capitales. Esta percepción surge desde los años 60 y 70, cuando los campesinos y los indígenas realizaban las tomas pacíficas para la recuperación y democratización de las tierras y era precisamente el Ejército el encargado de sacar a la fuerza a los campesinos e indígenas.

Los movimientos guerrilleros le apostaron a la formación política de la gente, con escasos resultados debido a la resistencia de las organizaciones sociales.

Asimismo, observan que en las dos últimas décadas, cuando los paramilitares llegaron a despojar a los campesinos e indígenas de sus tierras con tomas armadas, las Fuerzas Armadas no aparecían.

La “pequeña guerra fría”, que en esta región es también una guerra de clases, creció durante la década de los 90, por la llegada de nuevos actores armados. Tan grave fue el desenlace, que la mayoría de los representantes de movimientos cívicos y partidos de izquierda que ocuparon cargos de elección popular fueron asesinados. Entre ellos, tres alcaldes, varios concejales e innumerables líderes de las juntas de acción comunal y la Unión Patriótica, principales blancos de la guerra sucia. El debilitamiento de la ANUC, organización que se rehusó con mayor ímpetu al apoyo a la lucha armada, se convirtió en objetivo estratégico tanto de los grupos de poder como de las FARC.

Corrupción y fraude electoral

El anclaje de clanes familiares en los cargos públicos ha ido acompañado de una sistemática práctica de corrupción y fraude electoral. La manera de llegar y conservar el poder se ha dado mediante el clientelismo político, la compra de votos y otras formas de fraude electoral. En las elecciones para elegir Congreso en el 2010, como en las de los años anteriores, diferentes medios de comunicación denunciaron que en cabeceras municipales como Sincelejo se dio la compra de votos y que varios políticos ofrecieron entre 40 y 100.000 pesos a los ciudadanos. Estas prácticas encuentran refuerzo en los rasgos de la cultura de la ilegalidad, arraigada en la región.

Por otra parte, ha sido reiterada la captación de recursos por parte de los funcionarios públicos tanto de Sucre como en Bolívar. Como resultado de este fenómeno, los municipios de Los Montes de María han presentado índices precarios de transparencia en el manejo de los recursos del Estado, hecho que se vio especialmente agravado durante el tiempo en que el paramilitarismo ejerció control territorial en estos municipios.

Varios congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y funcionarios públicos de la Costa Caribe, algunos con incidencia directa en Montes de María, han sido condenados y son investigados por sus vínculos con el paramilitarismo y su ayuda a este grupo ilegal, como se verá más adelante.

Estos hechos, así como la captación de los recursos del Estado y el fraude electoral son factores que impiden el desarrollo humano de su gente y que llevan a preservar las condiciones de desigualdad en su sociedad.



3. Causas coyunturales y actores

Así como sucedió con la llegada de la guerrilla a la zona, los problemas también se agudizaron cuando aparecieron en la región otros actores ilegales, lo cual ocurrió en la década de los 90, cuando se consolida el narcotráfico y emergen los grupos paramilitares, ambos grupos de origen foráneo, con la expectativa de articularse a las dinámicas locales. Sin embargo, la sociedad montemariana ha ejercido valerosas acciones de resistencia que han impedido que los grupos ilegales se compenetren con la sociedad, como era la expectativa de aquellos.

Ambos fenómenos han producido efectos nocivos para la sociedad local, pero cada uno con sus particularidades. La diferencia podría explicarse desde el planteamiento que hace el sociólogo Daniel Pécaut⁵, en el sentido de que unos actores armados tienen interés en el control estratégico (que, entre otros aspectos, les proporciona ventajas para existir y movilizarse) y otros tienen un interés más amplio, como es el del control del territorio, que abarca, incluso, un control sobre la población. Así, mientras el narcotráfico lleva más de 20 años en Los Montes de María con el único interés de atravesar la región para sacar la droga, el paramilitarismo llegó, se instaló y dominó.

Estos dos fenómenos son considerados causas coyunturales de la conflictividad en la región, como se explica a continuación.

Control estratégico por grupos dedicados al narcotráfico

Los Montes de María son una región de un atractivo enorme para las fuerzas del narcotráfico, ya que por su territorio transportan la producción de narcóticos, elaborada con cultivos del sur de Bolívar y el bajo Cauca antioqueño y procesada en la misma zona.

La principal vía utilizada por el narcotráfico para llevar a puerto su producción es la Troncal de Occidente, una de las principales carreteras que conecta a Antioquia con la Costa. En la época más dura del paramilitarismo y como medida de seguridad, la Troncal de Occidente era cerrada en horas de la noche, lo que era aprovechado para el tránsito de los cargamentos de droga. Asimismo, los actores del narcotráfico compraron tierras a lo largo de esta vía, lo que les da mayores posibilidades de control.

La otra zona de especial interés del narcotráfico es el golfo de Morrosquillo, hacia donde se desvía la Troncal de Occidente y desemboca la Troncal del Caribe. Por allí está el corredor de la Costa que viene de Cartagena y llega al golfo y que es usado para embarcar la droga

⁵ Pécaut, Daniel (2002). *Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia civil. Ponencia presentada en el Seminario Internacional Dimensiones Territoriales de la Guerra y la Paz. Universidad Nacional de Colombia, Red de Estudios de Espacio y Territorio (RET), Bogotá.*

hacia Panamá y el Caribe. Como el golfo de Morrosquillo, son también puertos de salida de la droga el Canal del Dique y la Bahía de Cartagena.

Si bien las fuerzas del narcotráfico no han hecho una presencia tan amplia como en otras regiones del país donde se asientan los cultivos ilícitos, aquí se encuentra un “narcotráfico fino” que, según algunos investigadores, ha conseguido alianzas estratégicas con las autoridades. Además, se han apoyado en la fuerza de los grupos paramilitares y en las negociaciones hechas con grupos políticos a cambio de dinero para las campañas electorales.

Por medio de las acciones de los grupos paramilitares, el narcotráfico ha financiado el desplazamiento y despojo de tierras a campesinos, indígenas y afrocolombianos, con el interés de asegurar el tráfico de los estupefacientes y de invertir su riqueza en tierras de alto valor comercial y estratégico. La salida al mar en el golfo de Morrosquillo, ruta en la que se embarca la droga hacia Panamá y el Caribe, es la zona donde mayor cantidad de tierras han comprado.

La presencia del narcotráfico ha dejado consecuencias nefastas para la región. De manera especial, ha elevado y generalizado los niveles de corrupción, pues se moviliza a partir de sobornos a las autoridades. Y como efecto del superávit de dinero en manos particulares, ha incrementado el costo de vida, el fraude electoral, la cooptación del poder y la concentración de la tierra.

Control del territorio por grupos paramilitares

En los años 90 comenzó el fenómeno del paramilitarismo en la región, a partir del interés de los ganaderos y grandes propietarios de conservar sus tierras. Inicialmente fueron “Los Pájaros”, grupos de sicarios contratados por ganaderos y terratenientes, según investigadores de la región, quienes amedrentaban y asesinaban a las personas que se aproximaran a sus tierras. Dos familias de gran ascendencia son recordadas en Los Montes de María por servirse de Los Pájaros.

Entre 1985 y 1996 se desarrollaron múltiples estructuras que posteriormente harían parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), integradas a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC⁶. A partir de 1997, se configuró en la región el ejército paramilitar de las ACCU a partir de un acuerdo entre Salvatore Mancuso y las élites locales, como el ex líder paramilitar lo ha manifestado en versiones libres y varios investigadores lo han corroborado. En ese acuerdo se decidió la conformación de un grupo de autodefensas que entraría a operar financiado por las cuotas de los dueños de fincas y ganaderos.

Hasta ese momento, los grupos paramilitares eran ejércitos fragmentados, que no pasaban de ser escoltas de narcotraficantes, y escuadrones armados que, según han denunciado



diversas organizaciones de derechos humanos y ha establecido la justicia, perpetraban homicidios en connivencia con algunos agentes de la fuerza pública.

Las ACCU encarnaban el proyecto político que engendró Carlos Castaño cuando introdujo una nueva doctrina para los ejércitos privados al servicio de “los hombres fuertes” del campo. Ese proyecto concebía un nuevo orden social, que se impuso en la región de Los Montes de María, como en muchas otras regiones del país, y que transformó por completo las relaciones de poder: “impuso una nueva forma de extraer tributos, de regular la economía, de administrar justicia, de brindar protección, de organizar la prestación de los servicios básicos y de ejercer el monopolio de la coerción”⁷.

Así, se conformó el bloque Héroes de Los Montes de María, asociado al bloque Norte de las ACCU, con tres frentes: el frente Canal del Dique, comandado por alias Juancho Dique (en la zona de María La Baja); el frente Montes de María, comandado por alias Rodrigo Cadena (en la zona de San Onofre) y el frente La Mojana, comandado por alias Román Zabala (al sur de Los Montes de María).

También han tenido incidencia en la región algunos frentes paramilitares del bloque Central Bolívar que actúan en el sur de Bolívar y sur del Cesar, que no se articularon a las ACCU.

Las que eran milicias rurales al servicio de grupos de poder construyeron su proyecto autónomo y se erigieron en los “señores de la guerra”, como ha denominado el académico Gustavo Duncan a este fenómeno, para diferenciarlo de las anteriores manifestaciones violentas. Además de la autonomía, “los señores de la guerra” se caracterizan por su capacidad demostrada de liderazgo militar y de respaldo entre un número amplio de guerreros quienes reconocen el papel de comandante en jefe del señor de la guerra.

Aunque conservaron los vínculos con aquellos sectores a quienes sirvieron, ahora contaban con “una capacidad superior a otras fuerzas para apropiarse de las funciones de Estado y establecer un orden social en una región”, indistintamente “de la naturaleza y acuerdos que transaron con las otras fuerzas para garantizar la primacía sobre lo local”⁸.

Por la acción de estos grupos, a partir de 1996 la violencia se incrementó vertiginosamente en la región. Las masacres, los asesinatos selectivos, los homicidios indiscriminados, el desplazamiento forzado y las amenazas llenaron de terror los campos y poblados de Los Montes de María. Entre 1997 y 2003, los paramilitares de la región desplazaron a unas 100.000 personas y mataron al menos 115 en masacres como las de Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, El Salado, Mampuján, El Chengue y Macayepo, según información de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Toda esa violencia fue justificada por los “señores de la guerra” bajo el argumento de la instauración de un régimen de seguridad y la eliminación de la guerrilla. Sin embargo, sus víctimas fueron ante todo personas de la sociedad civil: líderes campesinos, estudiantiles,

⁷ Duncan, Gustavo (2006). *Los señores de la guerra*. Bogotá: Editorial Planeta, Fundación Seguridad y Democracia.

⁸ *Ibidem*.

sindicalistas, comunales, de derechos humanos e indígenas que abanderaban reivindicaciones a favor de sus sectores particulares y que iban en contra de los intereses de los grupos de poder.

Esta época de terror acabó con el importante tejido social que había construido la población. A punta de asesinatos y amenazas, destrozaron la ANUC, las juntas de acción comunal, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos. Aunque se presenta una gama tan amplia de grupos afectados, todos ellos hacen parte de un gran sector de la población: los sectores sociales populares.

Varios han sido los intereses de los paramilitares en Los Montes de María:

- ▶ De la alianza con el narcotráfico han obtenido los recursos para financiar sus ejércitos, a cambio de prestar sus servicios militares para posibilitar el tránsito de la droga hacia el golfo de Morrosquillo. Como parte de esta misma alianza cometieron masacres –como las que ocurrieron en San Onofre entre 1999 y 2000–, lugar en el que tenían interés tanto los amos del paramilitarismo como los señores del narcotráfico por su cercanía al golfo. Las masacres sirvieron para crear terror y dominar a la población, así como para despojar de sus fincas y obligar al desplazamiento forzado a los campesinos que poseían tierras en las que estaban interesados.
- ▶ En alianza con algunos miembros de la clase política, usaron las armas para forzar a la población a votar por los candidatos con quienes tenían acuerdos, hicieron nombramientos de funcionarios públicos y saquearon las arcas de varios municipios, según han denunciado investigadores y medios de comunicación.
- ▶ En alianza con algunos grandes propietarios, expulsaron a los campesinos que habían comprado las tierras que el Incora les obligó a vender y a otros que poseían tierras de su interés, según han revelado investigadores de la región.
- ▶ En alianza con algunos agentes de la fuerza pública asesinaron y expulsaron a líderes sociales y aniquilaron organizaciones sociales que habían consolidado un tejido social fuerte entre los sectores populares, según documentan investigadores y líderes sociales y se ha confirmado en los procesos de justicia y paz.

Estas alianzas puntuales les permitieron alcanzar su objetivo de dominar el territorio. Los “señores de la guerra” reprodujeron a una velocidad vertiginosa un régimen social, económico, político y militar en el que imperan la violencia y el poder del más fuerte. Un régimen en el que la legitimidad dejó de ser un valor público y alias Diego Vecino, alias Cadena y alias Juancho Dique ejercían poMunicipios el alto riesgo por venta masiva de tierras

der en el más abierto desafío a cualquier construcción de un Estado de Derecho.

Los mecanismos utilizados por los grupos paramilitares para obtener control del territorio fueron principalmente el desplazamiento forzado, el terror y el control sobre la población: un control económico ejercido sobre los estratos medio y bajo a través de actividades financieras especulativas (la gente recibía préstamos que luego la dejaban comprometida con sus



deudores), y un control social ejercido mediante las restricciones a la movilidad, la violencia contra las mujeres, el terror y el establecimiento de normas que la gente se veía forzada a acatar, entre otros.

Las mujeres fueron utilizadas sexualmente, incluso como botín de guerra, para amedrentar a sus maridos. También fueron forzadas a hacerles los oficios domésticos con o sin remuneración.

Otra forma de control fue la cooptación del Estado. En su alianza con la clase política, los señores de la guerra incidieron ampliamente en el manejo del Estado. Por una parte, participaron en los procesos electorales estableciendo alianzas con los políticos,

“con un doble y contradictorio propósito: en primer lugar, les interesa apoyar y hacer acuerdos con candidatos, o llevar candidatos propios a las administraciones locales, los cuales, una vez elegidos, les generan beneficios; en segundo término, siendo el símbolo más importante del régimen y de la democracia representativa, las elecciones constituyen para algunos actores ilegales un objetivo de su acción militar”⁹.

Esto se evidenció en la región en las campañas de 2002 y 2006, cuando, mediante mecanismos de presión y amenazas, la población fue forzada a votar por el candidato que contaba con el apoyo de los paramilitares. Algunos relatos sobre las elecciones en San Onofre describen cómo el puesto de votación era controlado por los paramilitares y el votante recibía un tarjetón marcado. En ese momento, San Onofre ya había sido sometida a dos masacres.

La alianza con políticos y algunos partidos no solo les dio acceso al Estado, sino que generó compromisos por parte de la autoridad política local en la perspectiva de favorecer sus intereses por medio de mecanismos como la adjudicación de contratos o el manejo de la nómina. La cooptación del Estado, ampliamente investigada y denunciada en esta región, comenzó por las personerías y alcaldías. Precisamente, en las versiones libres de desmovilizados del bloque paramilitar Montes de María, ellos han dado los nombres y apellidos de los funcionarios que fueron beneficiarios suyos en al menos cuatro municipios de la zona: El Guamo; El Carmen de Bolívar; San Jacinto y San Juan Nepomuceno.

La incidencia que tuvieron los actores armados en Los Montes de María se infiere de varias investigaciones, entre ellas un estudio realizado por Foro por Colombia¹⁰ en el municipio de Ovejas, donde los paramilitares ejercieron presión para la contratación o inversión y recibieron protección e impunidad.

Los mecanismos utilizados por los grupos paramilitares para obtener control del territorio fueron el desplazamiento forzado, el terror y el control sobre la población.

⁹ Velásquez C. y Fabio E. (2009). *Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos. Foro Nacional por Colombia y GTZ.*

¹⁰ *Ibidem.*

La impunidad del fenómeno paramilitar cobijó a Los Montes de María. La debilidad institucional facilitó el dominio territorial por parte de estos grupos, su infiltración profunda en la vida política y la cultura de la sociedad y dejó una huella por la crueldad con que atacaron y despojaron a la población.

4. Actores locales de paz y sus capacidades de construcción de paz

La región de Los Montes de María cuenta con una gran diversidad de actores e iniciativas dirigidas a la construcción de la paz. Entre ellos se encuentran principalmente las organizaciones por la paz, grupos de sectores poblacionales tanto urbanos como rurales, las iglesias, los campesinos, los estudiantes, los grupos étnicos, las organizaciones de mujeres y algunos representantes de las instituciones públicas (de las gobernaciones, alcaldías municipales, organismos de control, etc.), entre otros.

De manera especial, se observa allí una gran fuerza de las comunidades, que han impulsado acciones y buscado movilizar en la perspectiva de la paz:

“Las iniciativas de la sociedad civil de carácter popular constituyen en su diversidad el mayor aporte a la construcción de la paz en el territorio; los actores de estas iniciativas han tenido que dialogar con los sectores armados ilegales, superar y sobreponerse a los efectos de la confrontación irregular, promover organización y plantear el debate público sobre las posibles soluciones para la salida de los conflictos”¹¹.

Se trata de iniciativas pequeñas que no pretenden grandes impactos regionales sino la resolución de problemáticas cotidianas asociadas al conflicto y la violencia: desde la búsqueda de protección mínima y rechazo a actos de violencia, pasando por iniciativas productivas para resolver necesidades básicas inmediatas, hasta acciones de formación y de prevención.

Desde los años 80 y 90, estas iniciativas han sido acompañadas por varias organizaciones nacionales de carácter no gubernamental como Redepaz, la Asamblea por la Paz, universidades como la Nacional, la Javeriana, los Andes, la Corporación Universitaria del Caribe y la Universidad de Cartagena. A estas iniciativas se han sumado otras organizaciones nacionales e internacionales que han apoyado a la población local.

Históricamente, las organizaciones campesinas han cumplido un papel central en la configuración de las dinámicas sociales y políticas en la región de Los Montes de María; esto las



¹¹ Tomado de un documento sobre Los Montes de María elaborado por Cinep, Synergia y PNUD y en proceso de publicación.

sitúa también como una de las actoras más relevantes en la dinámica de paz: “Es el capital social más consolidado que hay en la región”, afirma el documento *Dinámicas regionales de construcción de la paz en Colombia*, de forma especial por su labor en el proceso de organización del campesinado y la exigibilidad de sus derechos y de propuestas productivas.

Estas organizaciones, así como las comunales, de maestros, sindicalistas, defensores de derechos humanos, movimientos cívicos, entre otras capacidades locales de paz, han sido eje fundamental de la construcción del territorio y la sociedad entre los sectores populares. A su vez, han sido uno de los principales blancos de la violencia paramilitar.

Si bien cada sector social trabaja para mejorar las condiciones de vida de la población que representa, todos ellos le han apostado a la humanización del conflicto, la eliminación de las formas de violencia, el respeto de los derechos humanos y la creación de condiciones para la paz. Las acciones en este sentido han sido realizadas con el concurso de varios actores, lo cual expresa un deseo de confluencia y de construcción colectiva.

Entre la variedad de manifestación de las capacidades locales de paz, hay dos especiales para destacar: una es la resistencia civil y otra, la incidencia política para la democracia local, que se desarrollará a continuación para después describir las principales expresiones de las redes sociales: mujeres, jóvenes, campesinos, grupos étnicos, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y redes de comunicadores. Una mención específica tendrá el Programa de Desarrollo y Paz.

Resistencia civil

Una de las más significativas expresiones por la paz en esta región tan afectada por los actores armados ha sido la resistencia civil a la violencia:

“Se trata de acciones que abarcan el rechazo a los actos violentos, experiencias de permanencia de comunidades amenazadas por los diferentes grupos, procesos de retorno de poblaciones desplazadas, acciones de denuncia y protección de derechos humanos, fortalecimiento de redes sociales de alerta, y campañas de no-violencia y no agresión. Estas se han dado principalmente en los municipios de Carmen de Bolívar, Ovejas y San Onofre”¹².

Una de las maneras como la gente de la región ha expresado su rechazo a la violencia ha sido a través de manifestaciones contra todos los grupos armados que han cometido directamente atropellos contra su población, como las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública.

12 Tomado de un documento sobre *Los Montes de María* elaborado por el Cinep, Synergia y el PNUD, en proceso de publicación.

Así, son memorables manifestaciones como la marcha por la paz en el sur de Bolívar (El Carmen, 20 de diciembre de 1996); la peregrinación por la paz y la libertad (Ovejas, 1997); la peregrinación por la paz (abril de 2000); la declaración de zona de paz de la vereda Camarón de El Carmen de Bolívar (octubre de 2002) y la marcha de pañuelos blancos (Ovejas, junio de 2004).

En medio de esta dinámica de vulneración de derechos, de falta de oportunidades y de trato indigno a que fue sometida la población más pobre, se observa también un gran número de personas, familias y grupos que han reaccionado con una inmensa fortaleza y que han encontrado, ya sea en situación de desplazamiento o de resistencia, la manera de salir adelante esquivando el sufrimiento y logrando ofrecer a sus familias la protección, el alimento, la esperanza y demás condiciones mínimas de vida. La permanencia de familias amenazadas por los diferentes grupos en sus comunidades ha sido una de las acciones más valerosas de resistencia civil.

En numerosos corregimientos de Los Montes de María, mientras la mayor parte de la población se vio forzada a salir en desplazamiento, algunas familias se resistieron a salir. Soportando el hambre y el temor, se quedaron en sus viviendas, en un acto de defensa de su territorio, sus bienes y su dignidad. Solo cuando el grupo paramilitar abandonó la zona, recuperaron la libertad de movimiento y pudieron atender nuevamente sus cultivos. Durante estos periodos, las pocas familias en resistencia intercambiaron sus escasos productos y se acompañaron.

Incidencia y fortalecimiento del Estado local

Otra búsqueda que se destaca entre las capacidades locales de paz de Los Montes de María es la de fortalecer la democracia local. En su mayoría, las organizaciones comunitarias se han formado y dispuesto para su participación ciudadana con miras a fortalecer la gobernabilidad. De otro lado, se observa una importante capacidad para enfrentar y resolver los conflictos por vías pacíficas.

En los momentos en que el panorama de la política se ha abierto a nuevas expresiones, la ciudadanía se ha organizado para incidir políticamente con un gran entusiasmo por la transformación de las instituciones, en escenarios promotores de equidad, transparencia, desarrollo y paz.

Aún hoy, después de un periodo de cooptación de las instituciones por parte de grupos paramilitares, las organizaciones sociales hacen importantes esfuerzos por incidir en ellas, en un intento de redescubrir la política.

Entre las capacidades locales que contribuyen a la incidencia y el fortalecimiento del Estado local, la Corporación Nuevo Arco Iris menciona a “los líderes de oposición que denuncian la corrupción con los recursos públicos y que enfrentan a poderosos concejales que



mantienen relaciones con las redes de corrupción local y a quienes los jueces de circuito no se atreven a encausar”¹³.

Cabe destacar también el pacto democrático para los Montes de María apoyado por diferentes redes sociales y por la Fundación Desarrollo y Paz de los Montes de María.

Las mujeres

Sin duda, los bastiones de la resistencia en Los Montes de María han sido, ante todo, las mujeres y los jóvenes. En las escasas ocasiones en las que alguna comunidad enfrentó a los actores armados para reclamar el derecho a la vida de sus hijos, sus compañeros y sus vecinos, generalmente fue una mujer la que se atrevió a hablar.

Además, ellas han sido bastión de fortaleza para sus familias, a las cuales han sacado adelante en medio de la adversidad. Muchas abuelas se han hecho cargo de sus nietos ante el asesinato de sus hijos, ofreciéndoles no solo el soporte económico y formativo, sino también la fortaleza emocional para salir adelante.

Asimismo, han sido ellas, de manera especial en Los Montes de María, quienes han acudido a las autoridades a denunciar los atropellos y han impulsado el desarrollo de procesos judiciales y la búsqueda de la verdad y la reparación.

Las mujeres y sus organizaciones han demostrado estar entre las más destacadas en capacidades locales de paz. Ellas han tenido una reacción impactante, especialmente a partir de 2005, cuando se desmovilizaron los grupos paramilitares.

Desde entonces, se han conformado decenas de organizaciones de mujeres en todos los municipios de Los Montes de María, que se han articulado en redes como la Red de Mujeres de Los Montes de María y Narrar para Vivir y han participado en intensos procesos de formación. Ahora, son un movimiento de gran fuerza en la región.

Se han encargado de la atención psicosocial a las víctimas del conflicto y han visibilizado y denunciado ante las autoridades los hechos de violencia que se han ejercido sobre ellas.

Además, han dedicado esfuerzos a fomentar espacios contra la exclusión en la que históricamente han sido sujetas. De manera especial, han generado encuentros para compartir sus reflexiones sobre la violencia paramilitar que las azotó, la forma como se ensañó contra las mujeres y los caminos de salida, así como la atención psicosocial.

Los líderes de
oposición que
denuncian la corrupción
con los recursos públicos
son también capacidades
locales de paz.

¹³ Romero Vidal, Mauricio y Arias, Angélica (2008). 'Bandas criminales', seguridad democrática y corrupción. En Arcanos, diciembre.

Al menos 47 organizaciones de mujeres han avanzado en sus procesos organizativos y en la construcción de la agenda pública de las mujeres de Los Montes de María, para lo cual se han formado en temas como presupuestos participativos con enfoque de género. Uno de sus principales logros es la inclusión de un enfoque diferencial en los planes de desarrollo de por lo menos 10 municipios y la realización de dos audiencias públicas con autoridades locales, regionales y nacionales en las que ellas han presentado el diagnóstico de la situación de la mujer montemariana.

Los jóvenes

Los jóvenes también han jugado un papel fundamental, especialmente en su empeño por no dejarse absorber por la guerra, y por cambiar las condiciones que llevaron al horror de las masacres y los homicidios de sus familiares.

“Los grupos juveniles han orientado su acción a la promoción de iniciativas para generar nuevos liderazgos y para la garantía de los derechos de la juventud”, afirma Osverto Pérez, de la Asociación Red de Jóvenes Rurales de Los Montes de María. Algunos grupos juveniles crearon experiencias culturales como una forma de cohesionar a los adolescentes en torno a la creatividad y a la promoción de la vida.

Entre ellos se destaca el grupo de teatro La Calle, un colectivo de jóvenes de Zambrano, que desde 2003 ha encontrado en el teatro una alternativa al mundo de violencia que los rodea. Liderados por un artista, estos jóvenes se han formado en el teatro y en derechos humanos y han creado diversas obras que les permiten encontrar caminos distintos al de la vinculación a los grupos armados ilegales. A través del teatro, transforman los imaginarios que ha dejado el conflicto en su comunidad.

Los campesinos

Otra forma de resistencia ha sido la liderada por los campesinos mediante acciones que exigen la desconcentración de la tierra e impiden el progreso del fenómeno de contrarreforma agraria. Las diferentes asociaciones campesinas están articuladas en la Mesa Campesina, conformada principalmente por miembros de la ANUC. Esta juega un papel importante en la protección de tierras de los minifundistas y los campesinos sin tierra, así como en la defensa de la economía campesina. Es tan amplio su trabajo, que ha conformado tres mesas subregionales, cada una con una dinámica propia, y ha formado líderes campesinos de los 15 municipios en legislación campesina y habilidades para la incidencia.

Esta Mesa, que agrupa a más de 760 líderes campesinos de la región, trabaja por recuperar las tierras que les fueron usurpadas a los pequeños propietarios durante el tiempo de control paramilitar.



Así, mientras Acción Social ha establecido que las tierras no reclamadas por sus víctimas directas sean subastadas y ese dinero sea llevado al Fondo de Reparación, los campesinos luchan porque las tierras sean entregadas directamente a las víctimas beneficiarias del Fondo para trabajarlas y no a quienes tienen capital para comprarlas. Por esto, los campesinos han ocupado fincas tomadas por los paramilitares, entre ellas algunas que Acción Social ha dispuesto subastar en la región.

Quienes han defendido los derechos sobre la tierra han sido amenazados y otros asesinados, entre ellos tres líderes, como Rogelio Martínez, miembro de la Mesa Campesina, defensor de derechos humanos y ocupante de la finca La Alemania que había sido usurpada por alias Cadena en 2000. Martínez fue asesinado en mayo de 2010.

Los grupos étnicos

Otra forma de resistencia visible en la región es la que encabezan los grupos étnicos. Los colectivos afrocolombianos, que ya suman alrededor de 32, aún sufren los rezagos de tantos años de esclavitud –afirma Wilder Rojas, de la Mesa Afrocolombiana de Los Montes de María–. Asentamientos como el Palenque de San Basilio y poblados como María La Baja, de población negra, son importantes bastiones de esta cultura que todavía es tratada como la de ciudadanos de menor categoría. Por esto, y por la manera como han sido afectados por la violencia y la usurpación, sus líderes trabajan por construir este tejido y consolidarlo como una iniciativa de paz.

Por su parte, la Mesa Indígena, con una tradición organizativa ancestral, concentra 45 cabildos que trabajan en elaborar y desarrollar sus planes de vida, así como en promover su cultura a través de la etnoeducación y su autonomía en el manejo del Resguardo Mayor de Córdoba y Sucre. La dinámica interna de estos cabildos se da en un ambiente democrático y participativo, como un modelo de paz para el resto de la sociedad.

A pesar del efecto de los hostigamientos de los actores armados ilegales y sus intentos de apoderarse y cooptar los recursos que los indígenas reciben de la nación, sus cabildos continúan en el empeño de recuperar la tranquilidad, el territorio y el manejo transparente de los recursos comunes.

Las organizaciones de víctimas

Varias iniciativas trabajan actualmente en la región por la promoción y protección de los derechos de las víctimas con un enfoque de derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La atención a las víctimas es jalonada por organizaciones sociales e institucionales.

Entre los principales actores de paz que buscan hacer incidencia se encuentran las organizaciones de víctimas, que son las de mayor crecimiento y actividad en el momento a raíz de la desmovilización de algunos grupos paramilitares en 2005 y los procesos de verdad, justicia y reparación.

Las organizaciones de víctimas se encuentran articuladas en el Proceso por la Reconstrucción Integral de Los Montes de María, que se dedica “a apoyar a las víctimas y abrir los caminos para el acceso a sus derechos”, dice Ingrid Vergara, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Los Montes de María. Precisamente como las organizaciones sociales populares fueron el objetivo militar de los paramilitares, en algunos casos en asocio con agentes de la fuerza pública, las organizaciones de víctimas están conformadas, en su mayoría, por personas con una trayectoria importante de reivindicación social. Una de las estrategias impulsadas en la región ha sido “La ruta por la vida”, que ha logrado enlazar a 26 comunidades en un trabajo de visibilización de las víctimas, apoyo emocional y de recuperación de memoria histórica.

El Proceso por la Reconstrucción Integral de los Montes de María apoya a las víctimas y abre caminos para el acceso a sus derechos.

Otra iniciativa relevante de atención a las víctimas en la región son las Iglesias Santuarios de Paz, colectivos de la Iglesia menonita que han construido con sus propias manos barrios, escuelas y demás condiciones para el restablecimiento de familias sometidas al desplazamiento forzado. También es importante destacar los esfuerzos de la diócesis de Sincelejo y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación con sede en Sincelejo en el tema de la reconciliación.

Las organizaciones de derechos humanos

Otras organizaciones sociales que conforman importantes capacidades locales de paz son los colectivos de derechos humanos, que, a pesar de ser blanco de ataques de los grupos paramilitares, continúan su valiente labor, denunciando los atropellos cometidos por los actores armados legales e ilegales contra la población civil. Al menos 27 de estas organizaciones, en su mayoría de la sociedad civil, se han articulado en la Mesa regional de derechos humanos con el fin de proyectar a la región una pedagogía en derechos humanos e incidir en la institucionalidad, de tal manera que se logre el respeto de los derechos, en especial del derecho a la vida, que muchos de ellos tienen amenazado.

Las redes de comunicadores

Los comunicadores populares de la región han articulado una propuesta de comunicación en torno a los procesos sociales que se cumplen en los 15 municipios de la región.



Organizados en la Red de Comunicadores Populares de Los Montes de María, han fortalecido la labor periodística que realizan en diversos programas en los medios de comunicación local y han creado el periódico *El Montemariano*, del cual cada periodista es corresponsal en su municipio. A través de todos estos canales, han incidido en la opinión pública, “sensibilizando en los temas de paz y conflicto, resaltando experiencias positivas de construcción de paz y posicionando las redes sociales y los derechos de las víctimas del conflicto”, afirma Héctor Gazabón, miembro de la Red. La labor que han realizado en comunicación para la paz es fundamental para contribuir a cambiar los imaginarios que atizan la violencia. Además de los comunicadores, otros profesionales y organizaciones de la comunidad también llevan a cabo acciones concretas encaminadas a ofrecer una información completa y balanceada sobre la realidad.

El Programa de Desarrollo y Paz, PDP

El Programa de Desarrollo y Paz de Los Montes de María (PDP) ha tenido el mayor liderazgo en la recuperación del tejido social de esta región. Recoge la apuesta de las Iglesias presentes en la región, de los sectores sociales y de algunas empresas privadas que se han constituido en sectores muy activos de la sociedad.

Desde su labor espiritual y religiosa, la Arquidiócesis de Cartagena, las Diócesis de Sincelejo y Magangue y la Iglesia menonita han ofrecido acompañamiento a las comunidades afectadas por la violencia y han contribuido a reconstruir la actividad de las organizaciones sociales y estimular valores de convivencia. Desde 2003 lideran, junto con otros sectores sociales, el surgimiento de un espacio organizativo que acompañe procesos de desarrollo y paz: la Fundación Red de Desarrollo y Paz de Los Montes de María, que hoy implementa el Programa de Desarrollo y Paz para la región, ejecutado en conjunto con numerosas organizaciones nacionales e internacionales.

El PDP ha funcionado como una instancia operativa y técnica, así como un espacio deliberativo y de concertación por la construcción de paz en la región. Es decir, con la mirada puesta en la transformación de las causas del conflicto. Por eso, ha enfocado sus principales esfuerzos en promover el sentido de región, fortalecer el tejido social, fomentar el desarrollo humano y la gobernabilidad. Así, la consolidación de organizaciones, redes y asociaciones es una estrategia central del Programa para impulsar procesos concertados en la perspectiva de generar cambios e impacto social.

Entre sus principales logros se reconoce el de haber devuelto a antiguos líderes y lideresas la confianza para seguir impulsando las iniciativas de sus movimientos sociales, por lo que desde el PDP se ha producido una importante dinámica de restauración y fortalecimiento

de las organizaciones. Asimismo, el Programa se ha convertido en sombrilla que blinda los procesos sociales en el territorio, los posiciona y los respalda.

El Programa enfrenta retos importantes en su aspiración de transformar la situación de gobernabilidad y de desarrollo. El PDP necesita multiplicar sus esfuerzos para lograr la incidencia de las organizaciones sociales, denunciar y hacer visibles las circunstancias de vulnerabilidad y la violación a los derechos humanos, así como transformar los proyectos productivos en alternativas de desarrollo para la región.

Es así como el Programa de Desarrollo y Paz ha sido el principal promotor del “pequeño renacer” que experimentan las organizaciones sociales de la región. Sin embargo, las transformaciones que estas lograron entre los años 70 y 80 para la equidad y la construcción de un orden social más justo y con grandes posibilidades para el desarrollo de todos aún se ven como un escenario difícil de recuperar. Las organizaciones trabajan llenas de vigor y convicción, y hay una movilización importante, pero las puertas de la institucionalidad aún tienen fuerte resistencia hacia ellas.

Actores gubernamentales y estatales

En la historia de la región se pueden distinguir diferentes momentos de la acción por la paz de los entes de Gobierno, tanto municipales, departamentales como del orden nacional. Es de destacar la labor desarrollada a mediados del siglo XX por el Instituto Colombiano del Tabaco en aspectos sociales y económicos y la inversión social en adquisición y reparto de tierras a cargo del Incora, que hizo posible el proceso de desconcentración de la tierra.

En épocas más recientes se han destacado acciones, en el plano departamental y municipal, dirigidas principalmente a los procesos regionales de desmovilización y control del orden público en el territorio. Durante la última década, los Gobiernos departamentales han aumentado su interés en el desarrollo y la paz de la región participando y, en menor medida, promoviendo acercamientos y concertación entre actores sociales para plantear alternativas a los conflictos.

La Asociación de Municipios de Los Montes de María, en 1995, organizó en El Carmen de Bolívar el IV Foro por la Paz y el Desarrollo de Los Montes de María. Desde esa época, y hasta 2009, funcionó la Asociación de Entes Territoriales (AET), que se desarrollaba en 17 entidades territoriales: 15 municipios y 2 gobernaciones, buscando que la región tuviera un soporte público institucional para la realización de los planes y proyectos concertados, ligados a los planes de desarrollo. La pausa de esta asociación se debe en gran medida a la falta de voluntad política de la mayoría de las administraciones.

La labor desempeñada por las alcaldías y gobernaciones departamentales ha sido principalmente de acompañamiento a algunas comunidades en proyectos específicos;



por ejemplo, al facilitar condiciones y aspectos logísticos para su participación social y política. Es de desatacar el nivel de participación de los municipios de Ovejas y El Carmen de Bolívar y, en menor escala, de Morroa, Zambrano, San Jacinto, María La Baja y San Juan Nepomuceno.

Entre las acciones realizadas por las administraciones municipales, se encuentra también la construcción participativa de presupuestos, las consultas sobre políticas públicas a comunidades, en especial de los cascos urbanos, el apoyo a iniciativas y campañas de no reclutamiento, además del respaldo a multiplicidad de trabajos comunitarios, culturales y acciones cívicas, dirigidas a brindar condiciones para su expresión por la paz o la protección del medio ambiente.

En el nivel departamental está la Comisión Facilitadora de Paz de Bolívar, que realizó acciones en 1997. Las gobernaciones de Sucre y Bolívar también fueron protagonistas de un acuerdo para impulsar procesos de desarrollo y paz. Como parte de este acuerdo, han participado las alcaldías y organismos de Gobierno de casi todos los municipios del territorio en lo que se ha denominado el Plan de Desarrollo Integral para Los Montes de María.

En los años recientes, la desmovilización de numerosos grupos paramilitares impulsada por el Gobierno nacional ha desatado procesos de organización de las víctimas y de otras personas, orientados a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. En tanto, algunos funcionarios locales de las personerías y alcaldías han reforzado su deber de buscar la aplicación de la Constitución de 1991 y la defensa de los derechos de grupos marginados.

“Pero estos funcionarios se enfrentan a comandantes de batallón que permanecen congelados en la mentalidad de la Guerra Fría y ven enemigos en los actores sociales que quieren ejercer su ciudadanía¹⁴.

Aunque es posible percibir algunos logros, el escenario de actuación de las iniciativas de paz resulta bastante hostil, y en mayor medida para organizaciones que trabajan desde la perspectiva de reivindicación y defensa de derechos; aquello que entorpezca el logro de los intereses de los poderes hegemónicos y que desafíe la lógica de la guerra impuesta en el territorio puede ser considerado indeseable y obligado a tomar partido¹⁵.

5. Situación actual y dinámicas

Después de dos décadas de violencia, en las cuales Los Montes de María han sido escenario de algunas de las más crueles historias que ha vivido el país, el contexto actual se caracteriza por tener menos muertes, mas no paz.

¹⁴ *Ibidem.*

¹⁵ Tomado de un documento sobre Los Montes de María elaborado por el Cinep, Synergia y el PNUD, en proceso de publicación.

Varias dinámicas han configurado la situación actual en el territorio. Si bien ha bajado el número de homicidios y se ha reducido la presión sobre la gente, la población sigue con miedo y lo define de esa manera: hay menos muertes, mas no paz.

A pesar de los esfuerzos oficiales, estos no están dirigidos a una transformación de las causas estructurales de los conflictos. Por el contrario, aunque hay calma y progreso, que para las organizaciones sociales es una situación aparente y no es real, las brechas sociales y el estado de desarrollo se agravan con las dinámicas actuales.

Después del periodo de terror impuesto por los paramilitares y por los grupos de poder que los respaldaban, hoy el territorio se reconfigura en consonancia con los esfuerzos por la paz, pero también con el interés de aquellos que propiciaron la expulsión de los campesinos, el desplazamiento forzado masivo de la población, la eliminación de las organizaciones sociales populares y la desbandada de los movimientos cívicos y políticos que representaban una alternativa de poder. Esto último es dinamizado por actores legales e ilegales que siguen actuando en conjunto y ejerciendo autoridad y terror sobre la población, apoyados por las estructuras o bandas emergentes.

Al mismo tiempo, la implementación del Programa de Desarrollo y Paz de Los Montes de María (PDP), el esfuerzo de las comunidades por reorganizarse y la intervención de numerosas organizaciones sociales y estatales, tanto colombianas como de la cooperación internacional, constituyen una apuesta por el restablecimiento de la población, comenzando por su tejido social, factor de indiscutible importancia.

En la actualidad, son seis las principales dinámicas relacionadas con la conflictividad y la construcción de paz en el territorio:

La recuperación y consolidación del territorio

Para hacer frente a la violencia reinante en Los Montes de María, el Gobierno ha implementado allí las políticas de Recuperación Social del Territorio y de Consolidación de la Seguridad Democrática.

Este proceso de recuperación social comenzó con la ampliación y refuerzo de la fuerza pública en 2002, cuando Los Montes de María fueron declarados por el Gobierno como una de las zonas de rehabilitación y consolidación (ZRC). Las primeras medidas fueron de incremento del pie de fuerza con policías y soldados campesinos en los cascos urbanos, el restablecimiento de la fuerza pública en los municipios de Colosó y Chalán, así como la entrada en operación de cinco escuadrones contraguerrilla y la ampliación de la red de informantes. También fue activado el Comando Conjunto del Caribe hacia comienzos de 2005, que reforzó la Infantería de Marina con tropas del Ejército y el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea. Este Comando fue retirado en 2008, el mismo año en que recrudesció el conflicto.



El significativo aumento de las tropas y la desmovilización del bloque paramilitar Héroes de Los Montes de María marcaron un nuevo escenario para la región a partir de 2005, cuando disminuyó el número de homicidios y se debilitaron los frentes insurgentes.

Los logros militares más importantes fueron la desmovilización del ERP y el debilitamiento del ELN y de los frentes 35 y 37 de las FARC. Estos últimos, sin embargo, siguen siendo en menor medida un factor desestabilizador, tanto así que Los Montes de María es una de las regiones del país en las que la fuerza pública ha tenido combates en forma sostenida durante los últimos años. Los campesinos relatan que aún los ven pasar por sus fincas en grupos muy pequeños. Asimismo, miembros de un reducto del bloque paramilitar Héroes de Los Montes de María al que pertenecen mandos medios no desmovilizados realizan acciones de extorsión y “limpieza social”.

El Plan Consolidación, que complementa el Plan Colombia, o el acuerdo de ayuda militar entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, reorienta la presencia militar en las zonas, ya no únicamente hacia las acciones de seguridad, sino también a la reconstrucción del desarrollo y la gobernabilidad.

Para esto, desconociendo en la práctica las dinámicas sociales que se impulsan desde el PDP y otras iniciativas territoriales de paz, fue creado un Centro de Fusión Integral o Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República en Cartagena. La intervención del CCAI, que en Los Montes de María abarca los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre, fue liderada inicialmente por militares, quienes han realizado obras de infraestructura, ciclos de formación y capacitación, actividades deportivas y de recreación. En los mismos cuatro municipios, la Agencia de Desarrollo del gobierno de los Estados Unidos (USAID) ha iniciado un programa de cooperación de 36 millones de USD para los próximos tres años.

Bajo la coordinación de un funcionario de Acción Social, actualmente impulsa acciones cívico-militares en torno a proyectos alternativos de desarrollo económico y de restablecimiento de la población desplazada. Por todo esto, la región es considerada por el Gobierno como un emblema de la seguridad y el restablecimiento de un territorio.

Para gran parte de la población, dicha intervención ha significado una recuperación de libertades y de la sensación de seguridad. Sin embargo, no percibe cambios significativos hacia el restablecimiento de las condiciones normales en la región.

Así les sucede en especial a las mujeres jóvenes, ya que en los municipios donde hay más presencia de la fuerza pública se presentan mayores casos de embarazos a temprana edad, así como de prostitución juvenil. También les ocurre a los pequeños propietarios. Paradójicamente, los cuatro municipios cubiertos por el CCAI en el Plan Consolidación –El Carmen de Bolívar, San Onofre, San Jacinto y Ovejas– hacen parte del grupo de municipios donde más se presenta la venta masiva de tierras.

San Onofre, por ejemplo, es una de las zonas en las que la población permanece más amenazada y donde los procesos sociales están más atrasados. Allí continúa la restricción de libertades y la presión sobre los campesinos, especialmente amenazados de perder sus tierras. Además, el regreso de antiguos miembros de grupos paramilitares que no hacen parte del programa de reintegración y que llegan en calidad de comerciantes o finqueros genera para ellos un ambiente de inseguridad.

En el incidente de reparación colectiva que se llevó a cabo en mayo de 2010 en la vereda Mampuján de este municipio, los antiguos jefes paramilitares Juancho Dique y Diego Vecino aseguraron que el proceso de desmovilización fue un fracaso y que la amenaza a las víctimas sigue latente ya que hay bandas activas en la zona.

Observadores y organizaciones de la región aseguran que se están creando condiciones que facilitan la contrarreforma agraria. De ser así, se continúa abriendo la brecha de desconfianza entre la institucionalidad y el sector campesino.

Uno de los aspectos que más se cuestiona en la región es que la política de consolidación combine los aspectos militares de la seguridad con la intervención estatal para el desarrollo. Por una parte, porque el hecho de efectuar las propuestas de desarrollo al margen de los procesos establecidos para la gobernabilidad rompe las posibilidades de recuperar la construcción de lo público. Mientras la inversión y la planeación de proyectos para el beneficio del territorio no sean tramitados en los espacios definidos para esto, como la construcción participativa de los planes de desarrollo, se avanza en contravía de la gobernabilidad, que es uno de los pilares de la construcción de paz.

Por otra, no se ha logrado la aspiración de construir un tejido cívico-militar en una región en la que la fuerza pública no ha logrado la confianza de una parte de los sectores populares. Esta desconfianza se debe a la percepción que tienen de que la fuerza pública ha beneficiado históricamente a la clase pudiente, a que algunos de sus agentes han tenido vínculos con el paramilitarismo –lo que ha sido demostrado por la justicia– y a las violaciones a los derechos humanos por las cuales ha sido demandada la Primera Brigada de Infantería de Marina. También a las reiteradas acusaciones que hace la fuerza pública de una supuesta alianza de las organizaciones sociales con la guerrilla, que resulta indignante para una cultura que históricamente ha rechazado el uso de las armas.

Se acentúa el despojo de la tierra de los campesinos. El problema agrario sigue siendo el principal factor de conflicto

El conflicto por la tenencia y uso de la tierra y los intereses de actores ilegales y grupos económicos sobre los recursos de los campesinos confluyen en una dinámica de apropiación de las tierras de los minifundistas.



Así, varios intereses convergen para crear una dinámica de aumento de la concentración de la tierra, de expulsión del campesinado y de empobrecimiento de la población local: los intereses de los narcotraficantes por obtener el control estratégico del territorio; de los grandes propietarios por poseer la mayor cantidad de tierras posible para elevar sus ingresos; de los empresarios de la palma de aceite y otros productos agroindustriales por elevar la rentabilidad de sus negocios; de los paramilitares por tener control del territorio y el interés de nuevos inversionistas que han llegado a la región motivados por la necesidad de los campesinos de vender su tierra para restablecerse en zonas seguras y pagar sus deudas.

Esta dinámica es agravada por factores como:

Políticas estatales de producción agropecuaria

Las políticas públicas nacionales para el agro en los últimos tiempos han estimulado los productos de crecimiento tardío, como la palma de aceite, los maderables foráneos y la ganadería extensiva. Así, la economía campesina se ha visto desestimulada, razón por la cual ha disminuido significativamente la extensión de tierras cultivadas con productos destinados para la canasta alimenticia¹⁶.

Entonces, las políticas públicas no han entrado a mediar en el conflicto de los cultivadores. Los principales beneficiarios son los grandes empresarios y propietarios de tierra, que detienen los grandes capitales.

El panorama de la región muestra que, en 2005, el 45% de las tierras de Los Montes de María se encontraba ocupado en pasto para el ganado; el 12%, dedicado a la agricultura y el 42%, a otros usos¹⁷. Entre 2005 y 2008, el área dedicada a la agricultura creció solo el 3,4%, mientras el área dedicada a pastura para el ganado, lo hizo en el 19,5% (gráfico 1). Vale la pena mencionar que el 3,4% de crecimiento de la agricultura es en su mayor parte en agricultura extensiva. El aumento del área de pastos "solo fue posible gracias a un descenso del área de bosques y otros usos. Se puede inferir que la tendencia es a efectuar una 'presión' sobre las zonas de bosques y rastrojos ensanchando la explotación ganadera en detrimento de las otras"¹⁸.

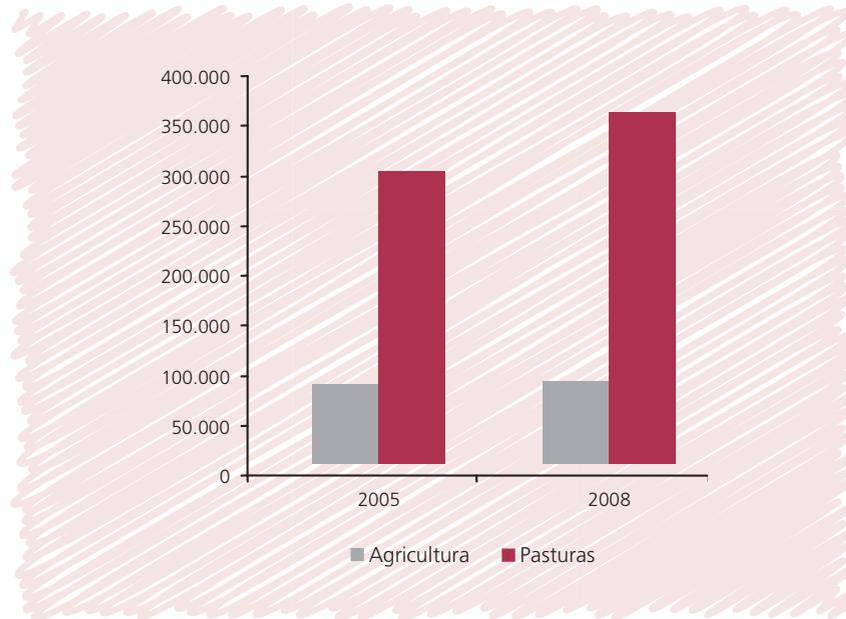
De esta manera, una de los cuestionamientos en la región es si la política nacional de desarrollo rural realmente ha posibilitado un uso de la tierra acorde con su aptitud y un desarrollo incluyente que dé posibilidades de vida a todos sus pobladores. Se ha denunciado de manera especial la presión de la ganadería sobre las tierras fértiles, en contravía de la

16 Menco Rivera, D. (2007). *El desarrollo social en los Montes de María*. En *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 83.

17 *Observatorio de cultura política, paz, convivencia y desarrollo de Los Montes de María (2009). El contexto montemariano: entre la incertidumbre y la esperanza. Informe.*

18 *Ibidem.*

Gráfico 1. Crecimiento de la producción, 2005 y 2008



Fuente: Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de Los Montes de María.

protección del medio ambiente y de una perspectiva sostenible que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.

El informe 2009 del Observatorio de cultura política, paz, convivencia y desarrollo de Los Montes de María ha señalado que, en los últimos años,

“se ha privilegiado la formalización de un esquema de desarrollo soportado en una acelerada concentración de la propiedad rural y la promoción y consolidación de proyectos agroindustriales de gran extensión afianzados en subsidios y medidas compensatorias como las exenciones tributarias y los créditos baratos”.

Apropiación de las tierras de los campesinos por vías ilegales o ilegítimas

Uno de los fenómenos que claramente se presenta en la región es que mediante presiones y engaños relacionados con las deudas que los campesinos aún tienen con el Estado, las tierras que hicieron parte de la iniciativa de reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo están regresando a sus anteriores dueños, en la mayoría de los casos, terratenientes.

Casos emblemáticos se registran con predios en El Carmen de Bolívar, como El Verdún y los ubicados en la vereda Tacaloa, donde 1.000 hectáreas que pertenecen a unas 40 familias campesinas víctimas de la violencia fueron vendidas a la empresa agropecuaria



Tacaloa. Estos predios contaban con una medida de protección establecida por el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada de Bolívar, que fue levantada por un juez ante una acción de tutela en marzo de 2010 y luego revocada ante acción judicial interpuesta por la Gobernación de Bolívar en procura de proteger la posesión de los campesinos. Aún los campesinos esperan regresar a sus parcelas.

El Programa de Protección de Tierras de Acción Social, encargado de coordinar los procedimientos para la protección de predios en riesgo de despojo, informó en 2009 que San Onofre, Ovejas, El Carmen de Bolívar y María La Baja son los municipios de Los Montes de María en los que se ha presentado el mayor número de solicitudes de protección de tierras.

El Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada de Bolívar estableció en los últimos años la medida de protección en 34.000 hectáreas de los municipios bolivarenses que hacen parte de Los Montes de María. Sin embargo, frente a la presión de los interesados en adquirir grandes extensiones de tierras, han sido radicadas ante este Comité más de 150 solicitudes de autorización para vender. Estos documentos radicados tienen la particularidad de presentar a las mismas empresas como los sujetos interesados en la compra. Por otra parte, el 70% de los predios sobre los que se ha solicitado autorización de venta fueron en el pasado objeto de reforma agraria. Es decir, habían sido vendidos o adjudicados por el antiguo Incora a los campesinos, muchos de ellos víctimas de la violencia.

La venta masiva de tierras se ve implementada por la llegada de comisionistas de finca raíz –dedicados especialmente a la compraventa de tierras– instalados en El Carmen de Bolívar. Además de este municipio, la compraventa masiva se presenta de forma especial en los municipios de Zambrano, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Ovejas, San Onofre y Colosó. La sociedad civil y organismos de control, como la Procuraduría, las personerías y la Defensoría del Pueblo, han advertido que los campesinos están siendo presionados con amenazas para vender sus predios.

De esta manera, la región, que otrora vivió una exitosa lucha por la tierra, hoy configura un escenario más complejo que el de los años 70. Ahora, una parte de los campesinos continúa la lucha tradicional por la recuperación de las tierras para la economía del minifundio, mientras muchos otros están dispuestos a vender sus parcelas e irse a las ciudades debido a:

- ▶ El terror generado por la presencia del paramilitarismo y las estructuras emergentes. A esto se suma la presencia de la guerrilla, que a su paso por las parcelas los convierte en blanco de los primeros.
- ▶ La falta de recursos e incentivos para sacar adelante sus cultivos y la ausencia de una infraestructura que les permita comercializarlos.
- ▶ La necesidad de pagar las deudas en que han incurrido durante el tiempo del desplazamiento forzado, aunado al interés de permanecer en la seguridad que ofrece el lugar de reasentamiento.

- ▶ La falta de desarrollo en el campo, que les impide darles estudios secundarios a sus hijos y contar con los mínimos para una vida digna.

Ante esta situación, que explica la vulnerabilidad de la población en el campo y su disposición a vender las tierras, se han exacerbado los actores interesados en adquirirlas.

Por otro lado, paramilitares y narcotraficantes se apoderaron de fincas tras asesinar a sus propietarios o forzarlos a transferirles el título, a venderles a precios irrisorios o a abandonarlas.

Un fenómeno que se presenta hoy en día es la llegada de compradores provenientes de regiones como Urabá y otras zonas de Antioquia que, aprovechando el miedo y la pobreza de los campesinos, les ofrecen la compra de sus tierras a un precio bastante inferior al real, pero suficiente para ilusionar a una familia que ha vivido en la escasez.

Así, por ejemplo, han llegado más de 70 empresarios antioqueños y comprado cerca de 60.000 hectáreas de tierra en la región desde comienzos de 2008¹⁹. Esto se ha presentado especialmente en El Carmen de Bolívar, Ovejas, Córdoba, San Juan Nepomuceno, María La Baja y Zambrano.

Finalmente, hubo una reconfiguración de la posesión de tierras. Los campesinos sin tierras fueron ocupando las parcelas de aquellos pequeños propietarios que se habían visto forzados a abandonarlas. Hoy, entre las familias que han intentado retornar, algunas se han encontrado con otros campesinos que se han asentado en sus bienes abandonados y ya poseen cultivos. Esta situación ha producido la confrontación entre los campesinos propietarios y los poseedores, sin que el Estado haya intervenido en forma oportuna para evitar la resolución de estos conflictos por la vía de la violencia.

Tras este proceso de apropiación, hoy el panorama de propietarios de tierra en Los Montes de María ha variado significativamente. El incremento del valor de la tierra ha sido vertiginoso, según los propios campesinos: una hectárea que en 2007 valía entre 200 y 400.000 pesos, hoy cuesta 2 millones y la tendencia es a una alta valorización, lo que aleja cada vez más las posibilidades de los minifundistas. Así, la concentración de la tierra ha aumentado, en un proceso que enajena la propiedad de campesinos de la región e incrementa el latifundio en manos de grupos económicos foráneos.

Según el Observatorio de cultura política, paz, convivencia y desarrollo de Los Montes de María, sumando las tierras que poseen los minifundistas en 2009, el 30% del total de los propietarios posee solamente el 1,7% del territorio de Los Montes de María. Mientas tanto, el 5% de los propietarios tiene el 25% (18.000 hectáreas).

Dicho Observatorio aplicó el índice de Gini para identificar las dimensiones del fenómeno de la concentración de la tierra y como resultado estableció que en 2009 dicho índice para los 15 municipios del Monte alcanza a ser de 0,75, es decir un altísimo nivel de concentración



¹⁹ La Silla Vacía, sitio web. Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María. Por Juanita León, 23 de noviembre de 2009. En <http://www.lasillavacia.com/historia/5346>

de la tierra. Cinco municipios superan este promedio evidenciando una mayor irracionalidad en la distribución de la tierra: El Guamo (0,84), San Antonio de Palmitos (0,83), Toluviéjo (0,79), María La Baja (0,78) y Colosó (0,76).

Empobrecimiento y debilitamiento de las clases populares

El despojo de la tierra y los bienes de los pequeños propietarios, sumado a la alianza entre las élites rurales y los ejércitos paramilitares que arremetieron contra los sectores sociales populares y al modelo de desarrollo que desestimula la producción campesina, han conducido a la pauperización de la población de estratos medio y bajo.

La población de Los Montes de María ha sido históricamente humilde pero con abundancia de alimentos y condiciones dignas de vida. Aunque desde décadas pasadas se presentaba cierta migración del campo a la ciudad en busca de factores del desarrollo, como la educación y la salud, la salida de los campesinos a las ciudades como consecuencia del desplazamiento forzado los ha hecho víctimas y los ha sumido en la pobreza al ser despojados de todos sus bienes y no encontrar medios de vida digna en los lugares de reasentamiento.

Ese empobrecimiento de la población campesina y de las clases populares en general ha aumentado la desigualdad social y la concentración de la riqueza en manos de la élite. Pero, sobre todo, ha creado condiciones que favorecen el dominio político y territorial en detrimento de la construcción de ciudadanía.

Aparte del fenómeno generalizado de pérdida de condiciones de vida a que se ha visto enfrentada la población de los sectores populares de la región, esta situación ha aumentado de manera particular la vulnerabilidad de aquellos grupos poblacionales que hasta el momento vivían un estado de discriminación. Es así como las mujeres, a quienes tradicionalmente se reservaban labores domésticas como el cuidado de los niños, la alimentación y el aseo, han sido forzadas por los grupos paramilitares a prestarles esos servicios en forma gratuita. Asimismo, han sido forzadas a tener relaciones sexuales y de pareja, a cambiar su forma de vestir, a tener hijos y a abortar, de acuerdo con el capricho del armado, según sus propios testimonios.

Los jóvenes, con frecuencia marginados de actividades que les posibiliten su desarrollo, como la educación o el trabajo, han sido reclutados forzosamente, ya sea por la presión de los grupos armados o por la falta de otras oportunidades, además de la necesidad de resolver las carencias que viven sus familias. Finalmente, la población más pobre, que ya afrontaba condiciones de vulnerabilidad, ha sido la que menos recursos ha tenido y posibilidades de sortear las vicisitudes a que se ha visto enfrentada.

Efectos del conflicto

Si bien el Gobierno ha tomado acciones y desarrollado estrategias –como la política de recuperación social del territorio– las violaciones a los derechos humanos no han desaparecido.

Violaciones a los derechos humanos

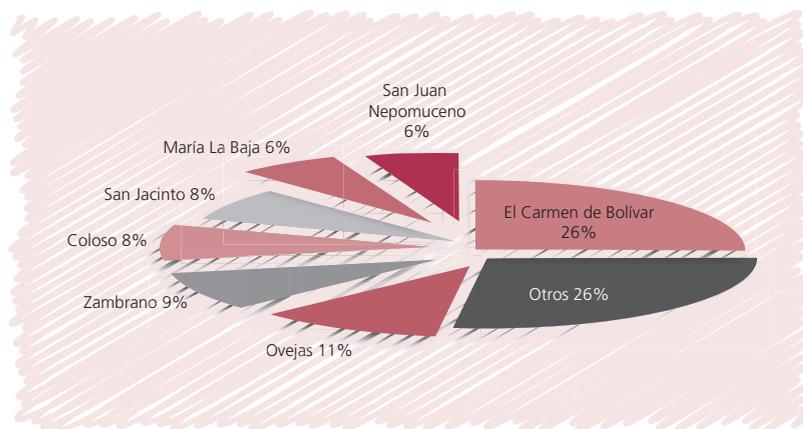
Entre 2002 y 2009, el Banco de Datos Noche y Niebla del Cinep²⁰ registró 50 víctimas de persecución política en El Carmen de Bolívar, quienes fueron heridas o asesinadas en atentados presuntamente perpetrados, algunos, por paramilitares y, otros, por la fuerza pública. Otras 10 personas fueron desaparecidas, 3 torturadas y 62 víctimas de detención arbitraria como parte de la persecución política en este municipio. Situaciones semejantes se presentaron en otros municipios de la región.

Asimismo, 11 jóvenes de Toluvié fueron desaparecidos y luego asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, en un caso de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

Variaciones en los homicidios

La disminución de los homicidios en los municipios de Montes de María fue evidente, especialmente en 2008. Mientras entre 2004 y 2007 se presentó un promedio de 125 homicidios al año, en 2008 ocurrieron 32. A pesar de esto, durante el periodo 2002-2009 varios municipios de la región presentaron tasas de homicidio por encima de la tasa nacional, como Colosó, Ovejas, Zambrano y El Carmen de Bolívar. Para los años 2002 a 2005, ver gráfico 2.

Gráfico 2. Proporción de homicidios por municipio, 2002-2005



Tomado de DNP, FRDPMMA. Cifras de violencia 2002-2005, Montes de María. Fuente: Policía Nacional.

²⁰ Cinep, Noche y niebla. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. En www.nocheyniebla.org



La tendencia a la disminución de homicidios en esta región varió en 2009, cuando el número de muertes violentas pasó de 32 a 65, lo que refleja un incremento del 103%. Ese incremento se concentra precisamente en San Onofre y El Carmen de Bolívar, dos municipios emblemáticos de la política de la seguridad democrática, así como en María La Baja. En San Onofre, donde el narcotráfico y el neoparamilitarismo tienen grandes intereses; en El Carmen de Bolívar, que ha registrado una intensa compraventa de tierras y en María La Baja, con extensos cultivos de palma de aceite (cuadros 1, 2 y 3).

Si bien “el proceso de desmovilización, desarme y reintegración generó en su comienzo unos dividendos positivos en términos de reducción de la violencia homicida en aquellas zonas en las que las desmovilizaciones colectivas tuvieron lugar, este efecto ha cesado progresivamente”²¹.

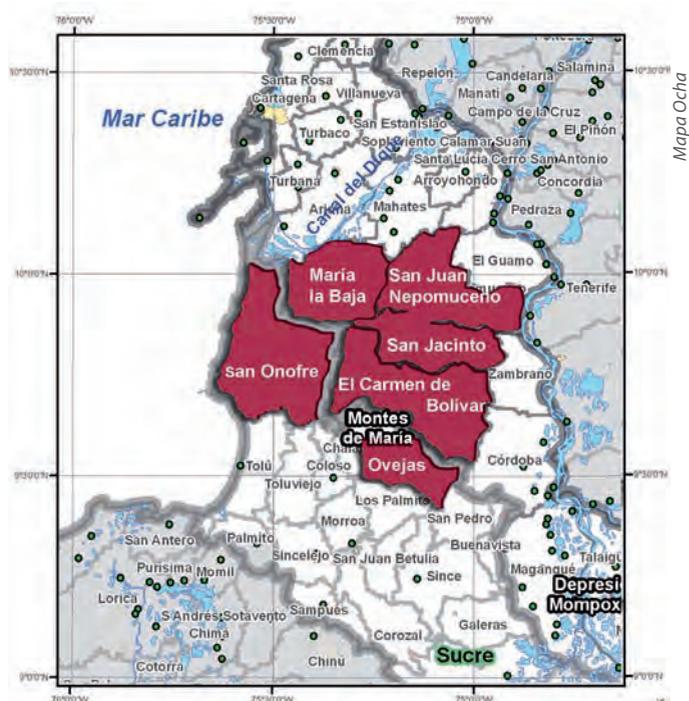
Los Montes de María es, precisamente, una de las áreas del país donde se han reactivado los ataques y las muertes causadas por paramilitares y una de las tres zonas –junto al sur del Canal del Dique y el lado occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta– que han sido identificadas por organizaciones sociales como focos emergentes de muertes de civiles del país.

Cuadro 1. Tasas de homicidio por municipio en Los Montes de María							
Municipio	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
El Carmen de Bolívar	63,5	48,4	55,9	42,3	85,4	10,4	28,41
El Guamo	0,0	51,4	0,0	76,9	12,8	0,0	0
María La Baja	14,7	17,5	22	19,7	13,1	8,71	25,98
San Jacinto	77,5	24,5	46,3	55,6	51,1	9,3	0
San Juan Nepomuceno	23,7	27,4	18,4	49,1	15,3	15,3	3,05
Zambrano	278,6	40,9	36	0,0	0,0	0,0	17,85
Córdoba	4,6	13,7	15,2	0,0	7,7	0,0	0
Colosó	238,8	217,2	32,1	0,0	32,6	0,0	0
Corozal	28,2	43,8	22,5	10,2	8,5	3,3	18,41
Los Palmitos	13,9	34	25,8	15,5	15,5	5,1	0
Morroa	82,8	49,1	23,3	7,7	7,6	0,0	0
Ovejas	54,5	56,7	106,2	97,2	13,9	23,2	0
Palmito	11	0,0	8,8	0,0	8,4	8,3	32,70
San Onofre	14	17,9	17,2	23,5	17,0	8,4	50,23
Tolúviejo	61,6	37,7	15,8	15,8	21,1	5,2	10,56
Total por año	967,4	680,2	445,5	413,5	310	97,21	186,89

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Policía Nacional.

21 Restrepo, Jorge A. y Aponte, David (2009). Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones. Bogotá: Universidad Javeriana, Cerac,.

Municipios más afectados por homicidios en el periodo 2002 - 2009



Fuente: Vicepresidencia de la República.

Cuadro 2. Número de homicidios por municipio en Los Montes de María

Municipio	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
El Carmen de Bolívar	51	39	38	29	59	7	20
El Guamo	0	5	0	6	1	0	0
María La Baja	9	11	10	9	6	4	12
San Jacinto	0	1	0	0	1	2	0
San Juan Nepomuceno	11	13	6	16	5	5	1
Zambrano	34	5	4	0	0	0	2
Córdoba	1	3	2	0	1	0	0
Colosó	20	18	2	0	2	0	0
Corozal	14	22	13	6	5	2	11
Los Palmitos	4	10	5	3	3	1	0
Morroa	10	6	3	1	1	0	0
Ovejas	16	17	23	21	3	5	0
Palmito	1	0	1	0	1	1	4
San Onofre	7	9	8	11	8	4	24
Toluviejo	16	10	3	3	4	1	2
Total por año	194	169	118	105	102	32	76

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Policía Nacional.



Cuadro 3. Tasas de homicidio comparadas						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tasa de Bolívar	28,8	21,1	23,6	26,4	25,5	17,6
Tasa de Sucre	30,6	26,9	19,5	17,9	17,9	13,2
Tasa subregional de Los Montes de María	64,4	45,3	29,6	27,5	20,6	6,4
Tasa nacional	52,8	44,6	42,2	40,2	39,1	36,3

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Policía Nacional.

Alarma por el desplazamiento forzado

La región se caracteriza por poseer uno de los mayores índices de desplazamiento en el país. Actualmente cuenta con 215.505 personas desplazadas, según los registros de Acción Social. Esto es particularmente significativo si se observa que la población de Los Montes de María se estima en 438.119 personas. El mayor volumen de expulsión en 2009 se concentró en los municipios de El Carmen de Bolívar (33%), San Onofre (11,7%), Ovejas (9,6%), María La Baja (8,3%) y Córdoba (7%). Gran parte de esta población se ha asentado en los cascos urbanos de Sincelejo y El Carmen de Bolívar, los mayores receptores entre los municipios de Los Montes de María.

Durante el periodo 1998-2008, se calcula un promedio de 15.951 personas desplazadas por año en la región. Al revisar la tendencia de 2009, los municipios que reportaron mayor número de personas desplazadas fueron El Carmen de Bolívar (147), San Onofre (120), Los Palmitos (95), Tolviejo (79) y Ovejas (73). (Cuadros 4, 5 y 6).

Cuadro 4. D esplazamiento forzado (por expulsión) en los Montes de María comparado con el total de los departamentos de Sucre y Bolívar	
DESPLAZAMIENTO FORZADO	Total 2003-2008
Bolívar y Sucre	140.780
Los Montes de María	61.331

Porcentaje de participación 43,5%

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Sipod, Acción Social.

Cuadro 5. Desplazamiento forzado (por expulsión) en Los Montes de María								
MUNICIPIO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Enero-junio 2009	Total general
El Carmen de Bolívar	4.485	3.842	3.173	2.920	1.830	1.040	110	17.400
El Guamo	63	119	68	101	96	53	3	503
María La Baja	924	1.094	1.174	1.417	1.084	774	32	6.499
San Jacinto	571	477	656	595	555	244	33	3.131
San Juan Nepomuceno	281	555	690	2.440	640	158	20	4.784
Zambrano	403	213	266	270	311	137	13	1.613
Córdoba	871	776	691	395	289	236	38	3.296
Colosó	511	1.061	545	344	213	134	31	2.839
Corozal	118	105	91	87	88	60	5	554
Los Palmitos	149	308	344	267	412	194	83	1.757
Morroa	162	558	231	265	239	133	12	1.600
Ovejas	954	1.189	1.519	1.456	717	514	55	6.404
Palmito	98	46	65	58	18	27	15	327
San Onofre	1.373	1.787	1.917	1.225	1.175	341	70	7.888
Toluviejo	579	641	428	400	796	412	63	3.319
TOTAL GENERAL	11.542	12.771	11.858	12.240	8.463	4.457	583	61.914

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Sipod – Acción Social

Cuadro 6. Desplazamiento de afrocolombianos en Los Montes de María, 2003-2008

MUNICIPIO	2003-2008
El Carmen de Bolívar	1.364
María La Baja	2.659
San Jacinto	496
San Juan Nepomuceno	287
Zambrano	135
Córdoba	222
Colosó	127
Ovejas	316
San Onofre	2.461
Toluviejo	115
TOTAL	8.302

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Sipod, Acción Social.



Reclutamiento de jóvenes

Debido al asentamiento en la región de estructuras emergentes o neoparamilitares, así como a la permanencia de algunos grupos guerrilleros del ELN y las FARC, el reclutamiento de personas para ingresar a sus filas es aún un fenómeno significativo en la región. De manera especial se presenta la situación en jóvenes, quienes son llevados con promesas de trabajo en el campo y de altos ingresos.

Otros toman la opción de hacer parte de las filas para tener un ingreso para sus familias y unos más encuentran en estos grupos armados argumentos con los que se identifican y eligen seguirlos.

Estas formas de reclutamiento de jóvenes para los grupos ilegales se han convertido en una gran inquietud para las familias, las organizaciones sociales y las instituciones de la región.

En la actualidad, y después de la desmovilización del bloque paramilitar Héroes de Los Montes de María, los jóvenes desmovilizados son los más afectados por el fenómeno del reclutamiento. Las estructuras emergentes tienen interés en contar en sus filas con personas que ya han sido entrenadas en la milicia, por lo cual estos jóvenes reciben con insistencia llamados a volver a las armas. La MAPP-OEA afirma que una de las situaciones que hay detrás de la cantidad de desmovilizados asesinados –y esto se ha presentado en San Onofre– es su negativa a ingresar a un grupo armado, como lo advierte en su último informe.

Minas antipersonal y munición sin explotar

La población también se ha visto afectada por las minas antipersonal. Los 15 municipios que comprenden Los Montes de María registran un alto uso de estos artefactos cuyo impacto en la población ha sido notorio. La mayoría de las víctimas entre 1990 y junio de 2009 han sido militares, con 191 casos, y 63 civiles, y la mayoría son hombres y mayores de edad, según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (gráfico 3).

La presencia de minas y munición sin explotar era escasa entre 1990 y 2001, cuando solo se conocían 18 víctimas. Las primeras seis de ellas sufrieron sus accidentes en Sincelejo en 1994. Sin embargo, en la última década la situación empezó a cambiar. A partir de 2002 – como en el resto del país– el uso de minas empezó a ser más frecuente, así como el número de pobladores afectados. En el periodo comprendido entre 2002 y junio de 2009 (gráfico 3) se concentró el 92% del total de eventos y víctimas ocurridas en la región desde 1990, según el programa presidencial.

Gráfico 3. Víctimas de minas antipersonal en Montes de María 2002-junio 2009



Fuente: Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal.

La situación ha afectado de manera particular a El Carmen de Bolívar, el municipio con el mayor número de víctimas en este periodo, 112, seguido por Zambrano (38), Ovejas (34) y San Jacinto (21).

El incremento del uso de estas armas no convencionales a partir de 2002 puede explicarse por la intensificación de las operaciones de las Fuerzas Armadas en la zona, particularmente por la realización de incautaciones y las actividades de desminado militar. En respuesta, las FARC y el ELN han sembrado estos artefactos con miras a reducir la capacidad de combate de las fuerzas militares.

El Gobierno ha trabajado en la región en acciones de desminado humanitario, como la que se realizó en 2009 en el corregimiento de Bajo Grande, San Jacinto, que destruyó 3 minas y 4 municiones sin explotar, una cifra inferior a la cantidad que se considera hay allí. En este mismo municipio de San Jacinto existen todavía otros corregimientos con zonas reconocidas por la comunidad como campos minados. También en Zambrano, la Infantería de Marina hizo un desminado inconcluso, sobre el cual certificó que debido a la extensión del terreno y a la falta de recursos, el territorio no había quedado totalmente "limpio". Es decir, aún faltan muchos más esfuerzos del Estado para lograr el desminado de la región.

En el cuadro 7 se presenta un panorama general de indicadores de violencia en la región.



Cuadro 7. Indicadores de impacto de conflicto en población de Los Montes de María

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Enero-junio 2009
Homicidios	194	169	118	105	102	32	76
Casos masacres	3	1	0	1	2	2	0
Homicidios de alcaldes y ex alcaldes	0	0	0	0	0	0	0
Homicidio de concejales	1	0	1	0	0	0	0
Homicidio de indígenas	1	0	0	0	0	0	0
Secuestros	33	27	11	7	3	0	0
Desplazamiento (expulsión)	11.542	12.771	11.858	12.240	8.463	4.457	545
Desplazamiento (recepción)	4.951	5.233	4.982	4.636	3.827	1.119	448
Minas/Muse (eventos-víctimas)	13/1	36/0	16	21	8	3	1
Acciones armadas (ataques, hostigamientos, emboscadas, etc.)	15	14	19	22	2	0	0
Contactos armados	15	40	24	33	29	6	1

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, diciembre de 2009.

La reintegración de los desmovilizados

Un aspecto fundamental para el restablecimiento de una región es la reintegración de los antiguos combatientes a la sociedad. La mayoría de los milicianos del bloque Héroes de Los Montes de María, desmovilizado en 2005, regresó al departamento de Córdoba, de donde son oriundos.

De aquellos que se quedaron en la región, la mayoría está en Sincelejo y en San Onofre y otros más en San Pedro, corregimiento de San Antonio de Palmito. Hasta el momento, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR), creada para atender y dar seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados ilegales, desarrolla un programa en Sincelejo y proyecta iniciar otro en San Onofre. El programa ha consistido principalmente en brindar a los ex combatientes recursos para su manutención y acceso a espacios de formación, así como en la gestión ante el sector privado para que sean acogidos en sus plantas de personal.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA ha determinado que existe un bajo grado de participación y de satisfacción de los participantes del programa de la ACR debido a la baja presencia de la institución y la disminución de las actividades realizadas, así como a las

condiciones de seguridad, la estigmatización y el poco compromiso por parte de algunos ex combatientes.

Además, los participantes tienen un importante grado de desconfianza frente a las instituciones y la fuerza pública, en parte explicado por las presuntas alianzas de algunos miembros de las fuerzas militares con relación a las estructuras emergentes, como lo señala el más reciente informe de la MAPP-OEA, de abril de 2010 Finalmente, los desmovilizados que se encuentran en riesgo no quieren ser visibilizados o identificados como tales y, por lo tanto, no asisten a los programas.

Una de las exigencias en la región es el fortalecimiento de la reintegración comunitaria para que no persista la percepción de que se está ayudando al individuo, pero no a procesos. Las víctimas han expresado que se sienten revictimizadas cuando ven que los victimarios reciben mayor atención que ellas por parte del Estado. Esta situación provoca prevención hacia los participantes de los programas de reintegración, a lo cual se suma la desconfianza que aún existe hacia los ex combatientes.

A pesar de esto, dos pequeñas comunidades, una en San Juan Nepomuceno y otra en San Onofre, han tomado la iniciativa de la reconciliación y han acogido a los reinsertados, haciendo posible su reintegración en la comunidad.

Pero estas son la excepción. A la mayoría de las comunidades de los municipios donde los grupos paramilitares cometieron mayores barbaries, como El Guamo, Los Palmitos, Zambrano y el mismo San Onofre, han llegado numerosos actores reconocidos como antiguos paramilitares, quienes han regresado como comerciantes, dueños de fincas o inversionistas. Ellos no hacen parte de algún programa estatal para la reintegración. Esta situación tiene amedrentada a la población.

Al mismo tiempo, los desmovilizados están siendo víctimas de represalias y varios de ellos han sido asesinados. En San Onofre, la población dice que han sido asesinados entre 15 y 16 desmovilizados. Esta situación de vulnerabilidad los afecta tanto a ellos como a la comunidad en general pues aumenta el temor. La misión de la OEA ha constatado –en su más reciente informe– que un alto número de estos crímenes responden a intentos de reclutamiento por parte de las estructuras emergentes.

Las estructuras emergentes o el neoparamilitarismo

Hay una nueva dinámica semejante a aquella que llegó a dominar el territorio: el surgimiento o transformación de lo que el Gobierno nacional denomina grupos emergentes vinculados con el narcotráfico y ONG de derechos humanos como la Comisión Colombiana de Juristas han llamado grupos neoparamilitares, que han elevado el nivel de complejidad



en las disputas territoriales locales en territorios en los que antiguamente hacían presencia las AUC.

Hasta el momento se ha registrado la presencia de varios núcleos de estos nuevos grupos en los departamentos de Bolívar y Sucre, que pertenecen a las estructuras emergentes denominadas Los Urabeños y Las Águilas Negras. Estos actúan en varios municipios de la región de Los Montes de María.

“Son grupos mucho más pequeños que los antiguos frentes de las AUC, varían significativamente en tamaño de una región a otra, ya no utilizan los nombres de aquellos y no constituyen una organización nacional. Pero son núcleos armados, que intimidan y están haciendo daño. Por esto se han constituido en poderes de facto, al igual que sus antecesores de las AUC. Así, mantienen influencia en vías, cruces de carreteras, corredores entre regiones y vigilan flujos de mercancías legales e ilegales, para solo citar las actividades relativas al narcotráfico. Además, estas agrupaciones ejercen control social y político con diferentes grados de intensidad en una cuarta parte de los municipios del país”²².

El objetivo principal de estos grupos en el país no ha sido enfrentarse al Estado, sino controlar por la fuerza territorios, población y flujos de mercancías de los cuales puedan derivar una extracción de rentas económicas, políticas y militares.

“Por esta razón, sus acciones tienden a ser clasificadas como unilaterales, ya que no buscan establecer una relación de combate con los agentes estatales. Como su objetivo central es población no armada sin capacidad de respuesta, la dimensión de estas actividades tiende al subregistro por ausencia de denuncias, consecuencia del temor a las represalias o, en algunos casos, complicidad de autoridades locales con los denunciados”²³.

Según analistas del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el posconflicto paramilitar es, entonces, una mezcla de grupos que subsisten, volvieron a ser parte del conflicto y se transformaron en el ejercicio de la violencia. Para las Fuerzas Armadas y el Gobierno nacional estos grupos son como bandas criminales (bacrim) o bandas que son inherentes al problema del narcotráfico, mientras las organizaciones sociales y académicas debaten sobre si estos grupos se han establecido como un nuevo fenómeno asociado al crimen organizado o como una tercera generación de paramilitares.

De los cuatro tipos de neoparamilitares que ha identificado el Cerac²⁴, en Los Montes de María se presenta el grupo denominado “nuevos ejércitos paramilitares” (NEP). Estos se

22 Romero, Mauricio y Arias Angélica. *Informe del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris*.

23 Romero, Mauricio y Arias, Angélica. *Sobre paramilitares, neo-paramilitares y afines: crecen sus acciones criminales ¿qué dice el gobierno? Informe del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris*.

24 Restrepo, Jorge A. y Aponte, David. *Op. cit.*

caracterizan por tener como objetivo la contrainsurgencia y buscar la captura del Estado. Se instauran como una estructura de corte militar, con uniformidad de sus miembros, armamento de asalto, patrullaje, operaciones coordinadas, combates directos y generación de nuevos espacios de poder mediante el control poblacional y la contrainsurgencia.

Tienen además una característica común a todos estos grupos: su objetivo de influencia es la criminalidad organizada. Los que se han instalado en Los Montes de María están integrados por ex miembros desmovilizados de las AUC y el bloque Central Bolívar, por el reducto no desmovilizado del bloque Héroes de Los Montes de María y por nuevos integrantes, con una lógica más orientada a los intereses del narcotráfico. Diferentes organizaciones han hecho referencia a las estrechas relaciones entre estos nuevos ejércitos y algunos agentes de la fuerza pública, entre ellas organizaciones de víctimas y la MAPP-OEA, en su más reciente informe.

Las Águilas Negras han sido responsabilizadas por las organizaciones sociales de desplazamiento forzado de población, así como de amenazas escritas y personales contra sindicalistas, concejales, funcionarios de personerías y defensorías, al igual que en contra de profesores y periodistas. Por esto, “no queda duda de que hay algo más que una motivación simplemente delictiva en las operaciones que realizan. En cada región hay distintas agendas que pueden ser afectadas mediante el uso de la fuerza y la intimidación”²⁵.

Por ejemplo, en una de sus acciones, las Águilas Negras en Los Montes de María amenazaron, el 14 de junio de 2008, a tres concejales de El Carmen de Bolívar: Héctor Teherán García, Alcides Tapia Maldonado y Ramiro Ortega Buelvas. En el comunicado que llegó a las instalaciones del concejo municipal, esta estructura ordenó a los concejales abandonar la ciudad en un plazo de 48 horas.

Leve recuperación del territorio

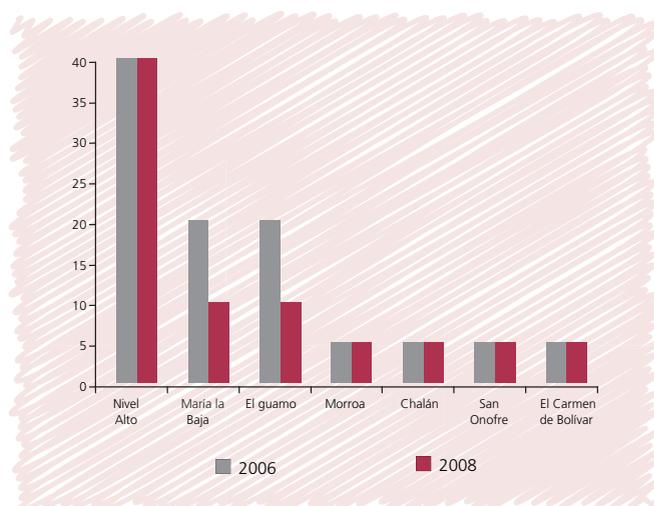
Después de la desmovilización de los grupos paramilitares –que habían cooptado varias instituciones (alcaldías, entidades públicas, etc)–, de las investigaciones y las condenas a autoridades locales y nacionales por vínculos con los paramilitares, uno de los escenarios en los que se percibe la recuperación del territorio es el manejo de las finanzas públicas municipales.

Al observar el estado de la deuda pública de los municipios de Los Montes de María entre 2000 y 2008, durante 2000 y 2004, años de alta injerencia paramilitar, aumentó el endeudamiento de los municipios, según el Observatorio de Los Montes de María. Sin embargo, progresivamente la deuda empezó a disminuir hasta llegar a una mínima expresión en 2007.



En la medición de la capacidad institucional de la región, realizada por este Observatorio, se ve una muy leve recuperación. Mientras en 2006, 6 de los municipios registraban un nivel crítico, 6 un nivel bajo y solo 3 un nivel medio de capacidad institucional, para 2008 hay 4 municipios en nivel crítico, 9 en nivel bajo y 2 en nivel medio. Es decir, mientras Palmito, Colosó y Los Palmitos subieron una categoría, María La Baja y El Guamo descendieron en el último año. El Carmen de Bolívar, Morroa, Chalán y San Onofre se mantienen en nivel crítico (gráfico 4).

Gráfico 4. Municipios en alerta por baja capacidad institucional



Fuente: Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de Los Montes de María.

En los procesos electorales recientes, aunque se vivió la presión y fue evidente la compra de votos, ya no se observaron las mecánicas violentas de elecciones anteriores. Sin embargo, preocupa que nuevamente fueron elegidos los caciques políticos investigados y juzgados por sus alianzas con el paramilitarismo, algunos directamente y otros a través de sus "herederos". Esto significa que no se dio una sanción moral ni política a quienes cohabitaron con la violencia paramilitar. En el departamento de Sucre, e incluso en San Onofre, la candidata al Congreso que mayor número de votos sacó fue Teresa García, hermana del ex senador Álvaro García, condenado por la justicia por su participación en la masacre de Macayepo, en ese municipio.

El resurgimiento de las organizaciones sociales

Después de la desmovilización de los grupos paramilitares, y como resultado de la labor del Programa de Desarrollo y Paz, de organizaciones sociales regionales y nacionales, de

la cooperación internacional y de iniciativas del Estado, se han abierto posibilidades de reactivación de algunas organizaciones y procesos sociales en la zona.

Como toda crisis genera potencia, grupos sociales que antes no estaban organizados han comenzado a crear sus colectivos y redes con un fuerte espíritu de construcción de paz.

Así, por ejemplo, la Iniciativa de Mujeres por la Paz ha llegado hasta la vereda San Isidro de El Carmen de Bolívar y ha acompañado a las mujeres que se quedaron en resistencia y a las que retornaron del desplazamiento forzado en la conformación de sus propias organizaciones. Como ellas, en numerosas veredas y corregimientos se crean organizaciones de mujeres por la paz, articuladas en redes como la Red de Mujeres de Los Montes de María o la red Narrar para Vivir.

Ahora, las organizaciones que conformaban el fuerte tejido social que había en Los Montes de María y contra el cual arreció la violencia, comienzan a resurgir con más cautela. La ANUC, por ejemplo, la más golpeada de las organizaciones, se encuentra en proceso de fortalecimiento y crecimiento. Son intentos de recuperar el tejido social porque el compromiso por superar la violencia y la injusticia prevalece sobre el miedo.

Las víctimas buscan verdad, justicia y reparación

Uno de los primeros pasos para llevar a cabo procesos de verdad, justicia y reparación es el acercamiento de las víctimas a las instituciones del Estado, entre ellas las personerías. Sin embargo, en los diferentes municipios de Los Montes de María fueron las primeras instituciones cooptadas por los paramilitares y aún hoy hay señalamientos a algunas de ellas porque no se han manifestado como independientes del régimen establecido ni han respondido a las necesidades de la población víctima del conflicto.

A su vez, puesto que las víctimas han sido principalmente integrantes de organizaciones sociales y líderes de izquierda, la confrontación ideológica que prevalece en la región hace que, en algunos casos, aún sean mirados como contendores más que como víctimas. Por esta razón, contrario a los derechos que los asisten, en ocasiones reciben de las autoridades tratamiento de enemigos políticos y ninguna intención de otorgarles compensación por los hechos que los victimizaron.

En esta situación también ha influido el que muchas de ellas no hayan sido reconocidas como víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado.

Por otra parte, los campesinos advierten que el modelo de desarrollo que se fomenta actualmente para el campo, basado en la gran inversión e infraestructura, visualiza al campesino como un empleado de grandes industrias y no como propietario de la tierra. Esta visión influye y desestimula la restitución de las tierras.



A esto se suma que los jefes paramilitares y del narcotráfico que han usurpado grandes cantidades de tierras en la región ejercen en la actualidad una fuerte resistencia para evitar perder los bienes adquiridos en forma ilegal. Mientras tanto, el miedo cohibe a las víctimas para pedir verdad, justicia y reparación.

Ese temor responde al amedrentamiento que se cierne sobre las víctimas, a raíz del asesinato de varias de ellas en proceso de recuperar sus fincas y de las amenazas a quienes denunciaron presuntas irregularidades en la compra de tierras, como ocurrió en El Carmen de Bolívar, entre otros casos.

6. Escenarios posibles y tendencias

Hoy, las tendencias y dinámicas de la región configuran varios escenarios posibles, como los siguientes:

Aumento de la vulnerabilidad social como factor para el control territorial

Las presiones por el control territorial tienden a continuar. Si bien el paso de los “señores de la guerra” puede ser registrado en la historia como un fenómeno que se desató por un periodo definido, este encontró terreno abonado en los conflictos estructurales de la región.

Ahora, los terratenientes que han promovido la concentración de la tierra, la clase política que ha dominado el Estado y los grandes inversionistas que promueven el modelo de desarrollo a gran escala, todos ellos miembros de la élite regional, permanecen en el territorio y mantienen vigentes sus intereses. La gran preocupación es que, para defender sus intereses, en muchos casos están tomando vías ilegales o aliándose con grupos armados ilegales.

En las elecciones de marzo de 2010 al Congreso de la República, reafirmaron su práctica de recurrir a mecanismos no legítimos para mantenerse en el poder, cuando se puso en evidencia la compra de votos, entre otros fraudes electorales que son investigados.

Algunos de estos actores encuentran una alianza estratégica en el narcotráfico, dispuesto a financiar favores a los grupos de poder para conservar la ruta de salida de su producción de droga.

Al mismo tiempo, las estructuras emergentes tienden a configurarse en un actor armado que pareciera que llegó para quedarse. En el informe ‘Bandas criminales’, seguridad democrática y corrupción, de la Corporación Nuevo Arco Iris, se afirma:

“Las redes locales y regionales de poder no se han desarticulado. Se están recomponiendo y la política pública para enfrentarlas no ha dado resultado o no existe, más allá de perseguir policialmente a los jefes más reconocidos. Si bien algunas de las antiguas zonas de influencia de los paramilitares están incluidas en los 60 municipios en los que se focaliza la “Consolidación Social del Territorio”, esta cobertura es muy limitada y la presión militar para perseguir a las “bandas criminales” no es tan intensa como sí ocurre en las áreas donde opera el Plan Patriota contra las FARC. Esto a pesar de que se conoce el interés de estas redes ilegales por mantener grupos de coerción privada –como las llamadas “bandas criminales”– y poner a su servicio a funcionarios y agencias o segmentos del Estado. Estos se prestan a ese juego, bien por corrupción, coincidencia ideológica o simple conveniencia”.

La denuncia que han presentado diversas organizaciones sobre los vínculos entre estos grupos y los grupos de poder local y la advertencia que hace la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA acerca de la relación entre algunos agentes de las Fuerzas Armadas y las estructuras emergentes²⁶ muestra la tendencia a un escenario semejante al que reinó durante el control territorial por parte del paramilitarismo. Así, la comunidad expresa la preocupación de que continúen dinámicas que les han resultado muy favorables a estos grupos para sus propósitos: la apropiación de las tierras de los campesinos, el empobrecimiento de la población de estratos medio y bajo y el debilitamiento de las organizaciones de los sectores sociales populares, manteniéndolas al margen de las instituciones, de las instancias de participación ciudadana y de los espacios de poder. Esa tendencia se observa en la continuación del desplazamiento forzado, como lo ha alertado recientemente el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada de Bolívar. Al dejar a la población en la pobreza y al debilitar su tejido social, se alejan las posibilidades de construir gobernabilidad y desarrollo.

Se reafirma la intervención cívico-militar

Una tendencia definida es la prolongación de la intervención cívico-militar en proyectos de desarrollo en el marco del Plan Consolidación del territorio, a menos que el nuevo Presidente de la República le dé un nuevo rumbo a dicha estrategia.

La intervención cívico-militar cuenta con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, con quien el gobierno colombiano concierta esta política en el marco de la ayuda militar a Colombia. Centros de pensamiento internacionales, como el International Policy Center, han señalado que la acción integrada, es decir, la combinación de la acción militar y proyectos de desarrollo en un área geográfica, es el nuevo rumbo que Estados Unidos le ha dado a



²⁶ OEA (2010). *Décimo cuarto informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA)*.

su asistencia a Colombia. En ese sentido, recientemente el Gobierno de Estados Unidos le ha dado al colombiano varias recomendaciones frente al Plan Consolidación y a su implementación en zonas como Los Montes de María, entre ellas:

- ▶ Centrar la atención en la necesidad de mejorar la calidad de la gobernabilidad y reducir la impunidad. Es decir, establecer un balance entre la estrategia militar de protección de la población y una estrategia para construir capacidad del Estado y una sociedad civil fuerte. Asimismo, plantea preservar el rol de seguridad para la fuerza militar y fortalecer la participación civil en la construcción de Estado.
- ▶ Afrontar el problema del despojo de la tierra desde la política de seguridad democrática²⁷.

Debido al peso político que tiene el gobierno de Estados Unidos en las definiciones del Plan Consolidación y a los ajustes que se han observado en ese país por la mayoría demócrata en el Congreso, estas recomendaciones podrían ser la tendencia en la implementación futura de dicho plan.

Toma fuerza la construcción de paz

Los actores de paz van marcando también una tendencia hacia el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y las redes sociales y el empoderamiento de sus líderes. La importante presencia y actividad de iniciativas locales, nacionales y de cooperación internacional en los municipios de Los Montes de María va generando una movilización en crecimiento, que encuentra a su vez eco en la élite intelectual y respaldo en algunos funcionarios públicos. Así, se avanza lentamente pero con legitimidad y gran convicción hacia la transformación tanto de las situaciones generadas por la violencia, como de las condiciones que han dado paso al conflicto. La importante resistencia de las organizaciones campesinas frente a la venta masiva de tierras, la creciente movilización de las mujeres y la actividad de las organizaciones de víctimas, resueltas a alcanzar la verdad, la justicia y la reparación, marcan una tendencia hacia la restauración de los derechos de la ciudadanía.

Hay que destacar la presencia internacional con una visión de región que se está consolidando en la región. El PNUD con su programa Redes y su sede en Sincelejo se propone ser la casa de Naciones Unidas para que junto con las agencias de FAO y Unfpa se reúna y coordine el trabajo interagencial y se desarrollen estrategias conjuntas con otras agencias como Oacnudh, PMA, ACNUR, UNIFEM, UNICEF y OIM. Asimismo, el PNUD promueve con Ocha las acciones del Sistema de Naciones Unidas con enfoque de recuperación temprana (early recovery) en el espacio del lasc.

²⁷ Isacson, Adam y Poe, Abigail (2009). *After Plan Colombia: Evaluating "Integrated Action", the next phase of U.S. assistance*. International Policy Center, diciembre. En http://justf.org/files/pubs/091203_col.pdf

Hay una importante presencia del Tercer Laboratorio de Paz, impulsado por la Unión Europea; la MAPP-OEA y otros cooperantes internacionales como Plan Internacional, Médicos sin fronteras y Acción contra el hambre.

Riesgo de inseguridad alimentaria

El aumento de la cantidad de tierras dedicada a la producción de biocombustibles y la ganadería, en detrimento de la producción de alimentos, configuran una tendencia hacia la inseguridad alimentaria de la que otrora fuera “la despensa de la Costa Caribe”.

Por esto, se espera que NO continúe la presión hacia los campesinos para comprar y arrendar la tierra y que se prendan las alertas para protegerlos.

A raíz de la experiencia de la mayoría de los minifundistas de María La Baja que ingresaron en el negocio de la palma y hoy están en la miseria, recientemente los campesinos de San Onofre se negaron a aceptar la entrega de sus tierras en arriendo por 14 años a una empresa de palma.

En la actualidad, están en proceso de montaje tres plantas para la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, en los municipios de María La Baja, San Onofre y Momil. Se ha anunciado que producirán 2.000 empleos directos y 4.000 indirectos, en 45.000 hectáreas de caña de azúcar.

El crecimiento de la producción de biocombustibles incrementará el valor de la tierra –fenómeno que ha ido de la mano con lo que las organizaciones llaman una contrarreforma agraria– y desestimulará la producción de alimentos, como ha venido sucediendo. Esta dinámica puede llegar a tener consecuencias como el desabastecimiento de alimentos hasta el punto de amenazar una situación de inseguridad alimentaria.

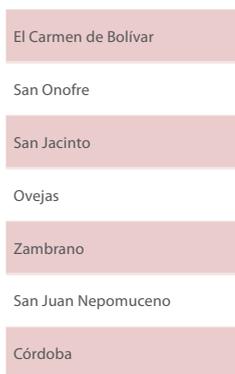
Posible continuación del conflicto por la tierra

La necesidad de la tierra para subsistir en una sociedad netamente agraria y el espíritu reivindicativo de su población hacen que se plantee como tendencia la continuación de las luchas por parte de los campesinos. La violencia con que han sido despojados en los últimos años y las amenazas que aún se ciernen sobre sus líderes han producido heridas muy profundas que no han sido sanadas.

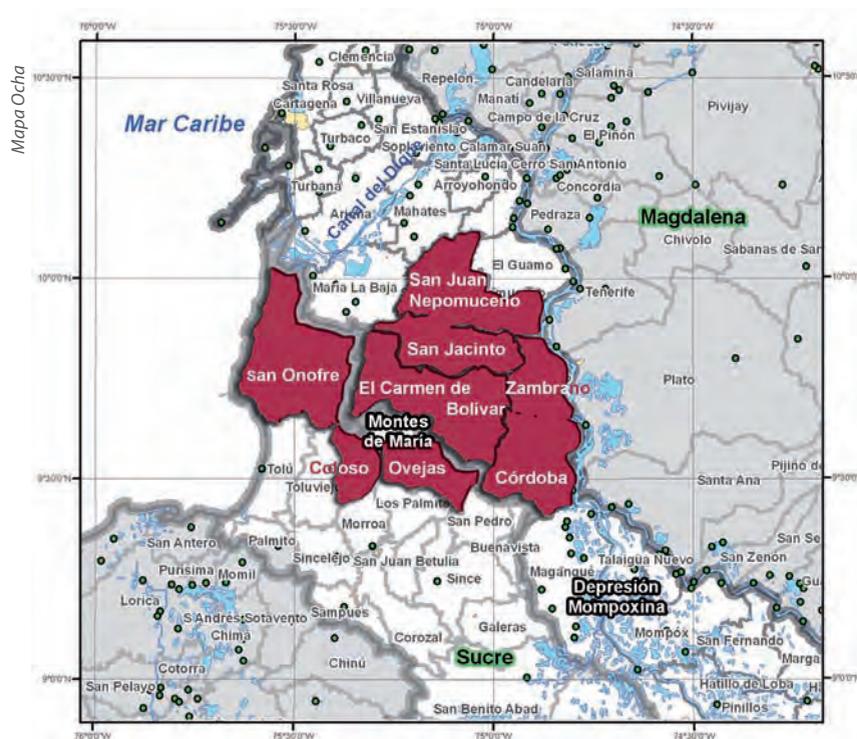
Tampoco ha sido transformada de raíz la práctica de las élites de acudir a los actores armados como una forma de resolver los conflictos. Por esta razón, persiste la acción criminal de las estructuras emergentes, que representa una gran amenaza de continuidad del conflicto armado.



Municipios en alerta por venta masiva de tierras



Fuente Vicepresidencia de la República.



7. Identificación de caminos a seguir

Prevención, mitigación, transformación de conflictos y cultura de paz

- ▶ Es importante ampliar la comprensión del conflicto a la esfera de la opinión pública para que estos temas y problemáticas hagan parte de la agenda de la ciudadanía y de las autoridades. Así, es conveniente darle relevancia al sector de la comunicación social entre los sectores sociales a fortalecer.
- ▶ Es preciso realizar acciones de prevención, al menos en dos sentidos: la protección de los líderes sociales y las acciones para la prevención de accidentes por minas antipersonal.
- ▶ Es prioritario trabajar para prevenir campos minados e incrementar significativamente las acciones integrales contra minas y la educación en el riesgo de estos artefactos. Además, es importante fortalecer las instituciones que realizan acciones en este campo y crear las condiciones apropiadas para la atención a las víctimas.
- ▶ Es necesario persistir en los esfuerzos y los apoyos técnicos, políticos y financieros para la prevención y transformación de los conflictos, así como para la construcción

de paz. Como parte de estos esfuerzos, es importante generar espacios para compartir las distintas visiones del conflicto y avanzar hacia la comprensión conjunta del mismo; y fortalecer la capacidad de los diferentes sectores sociales de analizar el conflicto y las salidas hacia la paz.

- ▶ Es indispensable continuar con el apoyo a las redes sociales, especialmente en sus espacios de incidencia social y política y en la identificación de modelos propios para la construcción de paz y la reconciliación. Es necesario contar con una estrategia para la prevención del reclutamiento de jóvenes en el territorio, así como fomentar las iniciativas juveniles y abrir espacios para su inserción educativa o laboral. Otros sectores que requieren un impulso importante son los de las mujeres, los campesinos, los afrocolombianos, los indígenas.
- ▶ Es necesario impulsar el Proceso por la Reconstrucción Integral de Los Montes de María, la Mesa Regional de Derechos Humanos y la activación real y efectiva de la Mesa de Garantías que reclama El Plan Nacional de Derechos humanos “como el escenario para construir confianzas, cuidar la vida, ser más Estado y avanzar en todo cuanto contribuya y favorezca la vigencia y el respeto de los derechos humanos y haga posible el desarrollo y la paz en Montes de María”.
- ▶ Hay que avanzar hacia la reconciliación trabajando en varios frentes, como la reintegración comunitaria de los ex combatientes de grupos armados al margen de la ley, proceso que aún es incipiente.

Verdad, justicia y reparación a las víctimas

- ▶ Para abrir caminos hacia la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas es necesario cualificar tanto el sistema estatal, como a las víctimas y la ciudadanía.
- ▶ Es una exigencia sensibilizar a las instituciones del Estado relacionadas con este tema para eliminar sus prejuicios sobre las víctimas y formarlas en procesos de cultura de paz.
- ▶ Hay que brindarles a las víctimas asistencia técnica sobre sus derechos y los procedimientos para garantizarlos, teniendo en cuenta a las poblaciones específicas, como mujeres, niños y grupos étnicos.
- ▶ Hay que impulsar la capacitación de las organizaciones de víctimas en torno a sus derechos y acompañarlas para exigirlos y garantizarlos.
- ▶ Hay que trabajar con la ciudadanía para su sensibilización y conocimiento sobre los temas de paz y la búsqueda de vías para la resolución pacífica de los conflictos. Esto permitirá generar una opinión pública comprometida con la no repetición de la violencia y la violación de los derechos humanos.
- ▶ Son imprescindibles acciones frente al despojo de tierras de los campesinos a través del impulso de iniciativas de organizaciones sociales y la institucionalidad.
- ▶ Es importante continuar con el papel que han cumplido las agencias de Naciones Unidas en coordinación con organismos internacionales en procura de que la Gobernación de Sucre tome medidas frente a la inminencia de riesgo de nuevos



fenómenos de desplazamiento por las tensiones originadas por la venta masiva e indiscriminada de tierras que pudieran alterar el orden socioeconómico de Los Montes de María.

Gobernabilidad y democracia local

- ▶ Es necesario dedicar esfuerzos a la sensibilización y la formación en temas de ciudadanía y Estado social de Derecho.
- ▶ Hay que trabajar en torno a los procesos de veeduría electoral y social, estimulando cada vez más el interés ciudadano por velar por la transparencia y la legalidad de los asuntos públicos. En este mismo sentido, se hace importante involucrar a los medios de comunicación, para crear una opinión pública sensible a estos temas.
- ▶ Un fortalecimiento institucional es necesario, en especial en el análisis de políticas de desarrollo, paz y reconciliación, que permita formular políticas apropiadas.
- ▶ Sería importante impulsar pactos de gobernabilidad que establezcan compromisos de los gobernantes para el desarrollo de una agenda sensible a la paz.

Desarrollo incluyente y equitativo

- ▶ Es necesario trabajar en tres frentes en los temas de desarrollo económico: la desconcentración de la propiedad de la tierra, la protección de las tierras de propiedad y uso de minifundistas y un modelo de desarrollo incluyente, con posibilidades de crecimiento tanto para la economía campesina como para la agroindustria.
- ▶ Sobre la propiedad de la tierra, es preciso impulsar amplios debates con los sectores decisivos de la sociedad para poner las problemáticas de la concentración de la propiedad y el despojo de tierras en el centro de la atención pública, así como impulsar medidas institucionales de protección de las tierras de los pequeños propietarios y poseedores.
- ▶ Sobre el modelo de desarrollo se exige facilitar escenarios de reflexión alrededor de un desarrollo regional incluyente con la participación de instituciones del Estado, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones campesinas. También, impulsar una política pública agraria sobre un modelo de desarrollo regional incluyente, que garantice el desarrollo de todos los sectores de población relacionados con el campo, así como la producción de alimentos a bajo precio.
- ▶ Es necesario trabajar de manera articulada con el equipo que está elaborando el Informe Nacional de Desarrollo Humano, teniendo en cuenta que su tema central será el desarrollo rural.

El propósito de la estrategia ART - REDES es promover condiciones y ambientes propicios a la búsqueda de la paz en Colombia.

En estos años de trabajo, la intervención territorial se ha focalizado en los Montes de María, Meta, Oriente Antioqueño, Nariño y Huila y Piedemonte Amazónico. Desde el 2009, también está en Cesar.

Son cuatro los ejes de esta estrategia, que hacen referencia a las cuatro dimensiones fundamentales del desarrollo humano:

- Prevención y transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz
- Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos
- Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz
- Desarrollo socioeconómico sostenible para la paz

